

Carlos Ciappina

América Latina en disputa: gobiernos de los pueblos o Neoliberalismo



Ciappina, Carlos María
América Latina en disputa: gobiernos de los pueblos o
Neoliberalismo / Carlos María Ciappina- 1a ed. - Berisso :
Carlos María Ciappina, 2019.

ISBN 978-987-86-1875-3

1. Neoliberalismo. 2. América Latina. I.
Título. CDD 320.51

A Patricia, compa era de la vida y el amor.

A Leandro, por su libertad.

Nota de la segunda edición

La primera edición de este libro, **“América Latina en disputa: gobiernos de los pueblos o neoliberalismo”** fue pensada en el formato papel siendo presentado a fines del año 2019.

Pocos meses después, estalló la pandemia Covid-19 la que como todos nosotros hemos experimentado modificó drásticamente nuestras vidas por varios y diversos motivos.

Por este motivo, hemos decidido hacer una segunda edición digital , para poder llegar a la mayor cantidad de lectores en un formato que logre evitar el aislamiento que nos ha impuesto la pandemia.

La editorial de la Facultad de Periodismo está –como siempre- totalmente consustanciada con los desarrollos de los docentes de la misma y con el compromiso asumido de continuar la tarea de formación universitaria aún en contextos tan difíciles como los de la actual pandemia. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social , sus autoridades , profesores, estudiantes y personal no docente ; han tomado la decisión de continuar formando, produciendo e investigando a través de los modos virtuales que son aquellos que nos permite desarrollar la pandemia.

Esta segunda edición -virtual- tiene y está enmarcada en esa decisión compartida y pretende ser un aporte a uno de los temas claves de la historia y la realidad latinoamericana: la tensión entre la expansión del neoliberalismo como proyecto civilizatorio continuidad de las prácticas neocolonialistas en América Latina y la emergencia de gobiernos nacionales, populares y democráticos que buscan en las tradiciones populares latinoamericanas a solución a los desafíos de nuestro continente.

De eso se trata, de seguir poniendo en debate y tensión esa dualidad.

Un enorme agradecimiento a la Editorial de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que hoy como siempre, nos hace sentir parte de su compromiso con la educación pública y en especial con una Universidad para la inclusión.

Carlos Ciappina, agosto de 2020

Prólogo

El libro *América Latina en disputa: gobiernos de los pueblos o Neoliberalismo*, del profesor Carlos Ciappina instala varias tesis muy importantes, partiendo desde las verdaderas raíces del neoliberalismo, ocultas en muchos análisis sobre esta temática, clave en la historia de América Latina y el mundo en los últimos años y que explica en buena parte el debate a veces sinuoso de las enormes diferencias entre las democracias populares y las “democracia neoliberales”, que en este último caso contradicen el concepto real del término.

Ciappina indaga en los oscuros principios de las doctrinas neoliberales y las consecuencias de su aplicación en distintos períodos históricos en el mundo y en nuestro continente, y su estrecha urdimbre con el tejido del terrorismo impuesto por las dictaduras que asolaron a nuestros países en América Latina.

Se trata de un ejercicio donde el lenguaje evade el tecnicismo académico y el relato histórico surge con transparencia para ser entendido.

Desde su comienzo el escritor va hacia las profundidades para conocer y entender, partiendo de la realidad, sin ningún tipo de eufemismos, con sistematización rigurosa, una serie de cuestiones claves para el futuro de la región.

En relación con América Latina, parte de los tiempos del colonialismo español, al que llamaron “conquista” o “descubrimiento” ocultando la realidad del genocidio que acabó con millones de nativos de los pueblos originarios, cuya cultura nunca pudieron enterrar, ni aún siete siglos después.

Partiendo de allí a las independencias frustradas, mejor decir castradas, por el naciente imperio a fines del siglo XIX, pasando por la sustitución del colonizador por el latifundio y las oligarquías terratenientes -que como recuerda Ciappina- tuvo “como horizonte social cultural y económico” a la “civilización europea”, por lo cual “un nuevo ciclo destructivo se abatió entonces sobre las poblaciones indígenas, sostenido por el cientifismo positivista, el racismo y la necesidad imperiosa de la industria europea de reproducir el capital.

Frente a esta otra etapa depredatoria se alzaron, por supuesto, nuevas resistencias”.

Es importante el rescate de las resistencias anticoloniales y post coloniales, recuperando el siempre olvidado protagonismo de los pueblos originarios en esas eternas luchas.

Continúa recorriendo la historia de nuestra región en distintas etapas hasta llegar al hecho nuevo de la “democracia” en las sociedades latinoamericanas, pasando antes por el infierno de las dictaduras del siglo XX.

Frente a este “nuevo hecho” surge un modo “de organización de lo social que

está en disputa, no ya entre Democracia o Dictadura (disputa de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX) sino entre democracias nacionales y populares o neoliberalismo" ¹, señala.

Esto es lo que lo lleva a hurgar en esas raíces profundas del neoliberalismo en nuestra región, dejando establecido que circunscribir este tema al tiempo presente, sería reducirle la densidad histórica que tienen en América Latina las formas societales basadas en la desigualdad, la inequidad, el despojo, el neocolonialismo. Formas y modos del ser de nuestras sociedades que pueden rastrearse desde la colonia hasta el presente”.

En ese rastreo analiza entre otros el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, en 1973 en Chile. En este caso, no para analizar la acción militar y sus dramáticas consecuencias sobre lo que existen cantidades de escritos, sino porque se transformó en un modelo de intervención estadounidense, cuya injerencia fue debatida en el propio Congreso de Estados Unidos, en 1975 en momentos en que el tema Vietnam sacudía los cimientos del poder imperial.

Ciappina analiza lo que hubo detrás del golpe como engendro siniestro, con la instalación de las doctrinas neoliberales, con estrategias superadoras de los antiguos liberalismos, impuesto a sangre y fuego en Chile y con tal potencia, que hasta ahora sigue siendo la gran tragedia del pueblo chileno.

“A simple vista pues, el golpe de Pinochet parecía una dictadura “pretoriana” más, de las tantas de América Latina. Pero las Fuerzas Armadas chilenas se propusieron algo más profundo aún: modificar drásticamente la matriz económico-social del país con un experimento económico social que estaba siendo propuesto desde hacía décadas y nadie había llevado a cabo: un cambio profundo hacia una economía de libremercado: el neoliberalismo”², señala Ciappina.

Describe el armado casi impecable de la instalación neoliberal en Chile, de cómo se conformó el Ministerio de Economía, con jóvenes ex alumnos de los teóricos neoliberales Milton Friedman y Friedrich von Hayek “nada menos que con los creadores de la doctrina neoliberal por excelencia” sostiene el autor.

Hace referencia a la asesoría personal del propio Milton Friedman enviado a Chile en 1975, quien, como recuerda Ciappina, propuso una “terapia” de shock: despedir el 30% de los empleados públicos, reducir el 20% el gasto público, aumentar el IVA, privatizar todas las empresas públicas y los sistemas de salud y educación y todo lo demás como la modificación del sistema de jubilaciones

1 Ansaldi, Waldo; Giordano, Verónica. *América Latina, la construcción del orden II*. (2015). Editorial Ariel, Buenos Aires.

2 Petras, James. *El milagro económico chileno: crítica empírica*. (Mayo- junio 1991). Revista Nueva Sociedad.

administradas por el Estado “hacia un sistema de jubilaciones privado, manejado por Administradoras de fondos de pensiones” trasladándose una enorme masa de recursos del trabajo chileno a una masa enorme de recursos económicos. También destaca la “flexibilización” y el sistema laboral chileno, “bajando costos y salarios (...) en apenas siete años”. Para 1980 estas reformas estaban consolidadas). “Chile pasó de la construcción del socialismo hacia una economía y una sociedad privatizada y monetarizada como ninguna otra del mundo”. Todo esto facilitado por una sociedad sometida al terror y la muerte.

“A partir de ese “éxito” (el neoliberalismo rampante) la teoría del shock neoliberal sería utilizada de allí en más Gran Bretaña (1978, Margaret Thatcher) y Estados Unidos (1981, Ronald Reagan). El neoliberalismo dio pues, sus primeros pasos en el mundo que ya no era en teoría sino en la práctica, de la mano de una de las peores dictaduras del siglo XX”, analiza Ciappina.

Con impecable didáctica el autor va desenrollando las causas y efectos que permiten entender ese laberinto de caídas y resurrecciones de nuestros pueblos a lo largo de todo el siglo XX, los nuevos genocidios, las nuevas formas neocoloniales de terrorismos, de destrucción y saqueo.

Está en este texto todo lo necesario para entender, paso a paso, los orígenes de la actual situación en Nuestra América y las implantaciones neoliberales que a veces no fueron estudiadas como tales.

Este libro “pequeño” como dice Ciappina, en referencia a la cantidad de páginas que tiene, es en realidad uno de los textos más esclarecedores que podemos ver en los últimos tiempos.

Va al fondo de los hechos, a las raíces -como el mismo dice- y esto ayuda a comprender desde una perspectiva distinta qué es lo que está sucediendo en tiempos de confusiones, de usos indebidos de los medios de comunicación, cuando se ha convertido a la palabra en un arma de guerra, a la noticia falsa, en una “novedad,” a pesar de que esto viene desde los principios de los proyectos de dominación y apropiación de países.

La palabra como arma esencial de la “guerra psicológica” utilizada para confundir, mentir, apuntar al corazón de los pueblos y de su dirigencia natural.

Se agrede, se desacredita, se degrada, y con esto “se mata moralmente” como rezan los mandamientos terroríficos de la Guerra de Cuarta Generación.

Remarca el autor que el regreso de las derechas a la política latinoamericana tiene “un componente novedoso: descartada la opción del golpe de Estado clásico, en donde las fuerzas armadas obturaban la permanencia de un gobierno democrático/popular, las derechas se han propuesto retomar el control del Estado en una mezcla de procedimientos de variado tipo: el golpe institucional de la mano del Congreso (el caso de Paraguay y Brasil), el triunfo dentro del sistema electoral (Argentina) y por otro lado los intentos de sublevación civil

para derrocar lisa y llanamente al ejecutivo (la rebelión de la Media Luna Fértil contra Evo Morales o la más actual del caso Venezolano)”.

Estos encadenamientos de sucesos que el libro nos describe, permite evaluar el por qué necesitaba el poder hegemónico destruir el más avanzado proyecto de emancipación en el siglo XXI, que fueron los enormes avances de la región hacia una integración estratégica, y los pasos dados hasta llegar a la conformación de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (CELAC), que surgió en Caracas en noviembre de 2011, lo que se transformaba en un gran obstáculo para Washington en su plan de llevar adelante el proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina.

Es muy difícil que pueda crecer, dar frutos y consolidarse un auténtico proceso democrático (popular) en países dependientes, en tiempos de decadencia imperial que enfrenta los planes expansionistas de Estados Unidos en el siglo XXI.

Además el imperio tiene que coexistir ahora con el resurgimiento de potencias como Rusia, China y otras que avanzan cada día, con lo que se comienza a recuperar el equilibrio perdido, lo que alienta sus urgencias .

Esto complica la situación de América Latina, considerado por Estados Unidos su “patio trasero” y por lo tanto su más cercano proveedor de recursos.

Por esta razón retorna la Doctrina Monroe, adelantada ya por el Documento Santa Fe IV, del año 2000 y por el trazado de sus proyectos recolonizadores, que estaban ya en marcha en 1999, para el control de los conflictos de este siglo que según sus “tanques pensantes” podrían amenazar supuestamente su “seguridad nacional”. Y también aplica una remozada Doctrina de Seguridad, adaptada a sus “necesidades” actuales, como se puede ver en los textos de Ciappina.

Es también la reacción ante las sorpresivas resistencias de los pueblos latinoamericanos iniciadas a partir del levantamiento del pueblo venezolano, contra las primeras medidas neoliberales que intentó imponer el presidente Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1989 cuando un pueblo, siempre anestesiado por un bipartidismo pactado, hizo saber al mundo que Venezuela, una potencia petrolera, no era un paraíso “democrático” como se mostraba: casi un ochenta por ciento de pobres habían estado invisibilizados hasta ese momento.

El “caracazo” que costó muchas vidas fue la primera rebelión antineoliberal, un chispazo que, sin saberlo, incendió la pradera.

El fuego de ese incendio se propagó y aún está vivo, a pesar de estos tiempos oscuros.

El proyecto neoliberal sin anestesia que se intentó imponer en los 90, fue derrotado en las calles y carreteras de América Latina.

Y llegamos a estos nuevos tiempos, después de dar un salto cualitativo extraordinario, cuya tensión perdura desde el año 2000, hasta hoy, aunque se

hayan dado importantes retrocesos.

Por eso este libro de Ciappina nos permite viajar entre unos y otros momentos de la historia, para entender qué es lo que está sucediendo en nuestra región y qué hay detrás de todo lo actuado hasta hoy para tratar de “tomar” América Latina y el Caribe, como el último reducto más seguro para el imperio en decadencia.

Cada capítulo nos confronta creativamente, proponiendo debates profundos y dando respuestas teóricas originales y necesarias en el momento actual.

También nos plantea una diversidad de debates, nos obliga a repensarlo todo, como las caracterizaciones que desvían las verdaderas temáticas del momento.

Por ejemplo desmenuza lo que es “fascismo y nazismo”, términos utilizados en los últimos tiempos, que a veces nos llevan a situaciones irreales y a equivocar las respuestas confundiendo aún más a los pueblos.

Es importante su aporte sobre los intentos neoliberales para retornar la conducción del Estado estableciendo que “las derechas latinoamericanas no están solas: cuentan, en todos los casos, con una alianza de nuevo cuño: el entramado entre el Poder Judicial y el poder de los medios de comunicación hegemónicos.

Esta trilogía de poder económico, sistema judicial y medios monopólicos de comunicación funciona en un doble sentido: por un lado responden a las orientaciones y demandas de la derecha en el proceso de deslegitimar a los gobiernos nacional-populares y, al mismo tiempo, cuando la derecha asume el poder, funciona como un bloque que provee un blindaje judicial y mediático para llevar adelante las medidas de recomposición neoliberal. Nos parece relevante analizar comparativamente, en este territorio de disputa, tres experiencias: el caso venezolano y los intentos de derrocamiento del gobierno democrático, el retorno de la derecha brasileña vía un golpe institucional y el caso argentino de un retorno democrático de la derecha conservadora.

Todo lo que se necesita saber para recuperar nuestra mirada estratégica hacia los enormes desafíos del siglo XXI, está en este libro.

“En esa puja entre proyectos inclusivos, democráticos y populares frente a las derechas promoviendo desde el Estado la reconstrucción de la exclusión neoliberal, se definirá el futuro de nuestro continente latinoamericano” sostiene Ciappina en el final.

Será muy difícil, pero nunca imposible, especialmente si enfocamos al verdadero “enemigo” de nuestros pueblos, sus estrategias y sus tácticas de dominación, lograr nuestras independencias definitivas en el siglo XXI.

Libros como éste abren el camino hacia ese futuro y esa esperanza.

Índice

I . Las raíces profundas del neoliberalismo latinoamericano.

II. Las raíces cercanas del neoliberalismo. Chile: 11 de setiembre de 1973. Mucho más que un golpe de Estado.

III. América Latina: de las esperanzas emancipadoras a la reconfiguración de las derechas.

Un escenario político-social en disputa.

IV. Bolsonaro: ¿Nazismo? ¿Fascismo? No.

Ultraderecha neoliberal latinoamericana.

V. Democracia, pueblo y derechas en

América Latina: repensar los marcos de análisis.

VI. Estado, democracia y neoliberalismo en

América Latina: ¿nuevas simbologías, nuevas identidades?

VII. Posverdad, falsas noticias y guerra jurídica:

el adelgazamiento de la democracia en América Latina.

Conclusiones

Bibliografía



I. Las raíces profundas del neoliberalismo latinoamericano

Hace poco más de quinientos años un mundo se lanzó sobre el otro. Un mundo depredador, patriarcal, arrasador de la tierra y sus riquezas, que no se detuvo -ni detiene- ante nada ni nadie para transformarlo todo en propiedad privada: el territorio, los seres, la vida.

Aquel mundo, -la Europa capitalista mercantil- consideró a éste, nuestro mundo latinoamericano, como un “Mundo Nuevo”.

Para aquella civilización capitalista, patriarcal y blanca, América -la que hoy llamamos América Latina- fue considerada, desde los inicios de la invasión, un espacio cultural, legal, social y, por qué no, humano “vacío”.¹

Se iniciaba así, la “conquista”, proceso en el cual cientos de culturas fueron consideradas por la Europa invasora como una otredad incivilizada y lábil, definida de modos negativos y excluyentes: no-blanca, no-cristiana, no-capitalista. Sólo útil pues, y en disponibilidad para servir laboral y productivamente a las necesidades de las coronas europeas y los señores conquistadores.

Pero lo que hoy llamamos América, estaba lejos de ser un territorio “vacío”: millones de seres humanos vivían sus propias culturas, sus propios modos de sostén económico, sus dioses y cosmovisiones, sus ciudades, sus casas, sus familias.

Ese orden de cientos de culturas vieron sus tierras ocupadas para levantar haciendas, plantaciones y minas, y sus lenguas y dioses -su propia cultura- prohibidos para imponer al único “Dios verdadero” y las lenguas de los invasores.²

Durante trescientos años de colonia, Europa se enriqueció con la apropiación territorial, el saqueo del oro y la plata y la venta de la producción de las plantaciones.

¹ Dussell, Enrique. *Introducción a la Filosofía de la Liberación*. (1995). Editorial Nueva América, Bogotá, Colombia.

² Argumedo, Alcira. *Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular*. (1992). Ediciones del pensamiento nacional, Buenos Aires.

Como en un espejo invertido, las poblaciones originarias se empobrecieron, perdieron buena parte de las tierras que les pertenecían y engrosaron el trabajo forzado, en nombre de la grandeza del reino. Un reino que estaba a 14.000 kilómetros de distancia.

Sin embargo, desde el comienzo mismo de la invasión europea, ese mundo -que no era nuevo- batalló contra la opresión colonizadora.

La historia oficial de una “Pax colonial” no se condice con la larguísima historia de luchas indígenas bajo el yugo colonialista. Tribus, pueblos y civilizaciones resistieron, manteniendo sus lenguas, sus cosmovisiones y tradiciones, escapando hacia lugares más recónditos, y, finalmente, también peleando con las armas en la mano. Túpac Amaru I, Atahualpa, Caupolicán, Túpac Katari, Micaela Bastidas, son sólo algunos de esos nombres que iniciaron la resistencia.

Los líderes y las lideresas de las independencias hicieron también suyas las reivindicaciones indígenas. En la lucha emancipatoria, los criollos vieron con claridad la situación en la que la colonia había dejado a los pueblos originarios. Belgrano, San Martín, Bolívar, Castelli, Artigas, Hidalgo y Morelos comprendieron pronto y plenamente que liberarse de España era inseparable de la liberación de los pueblos oprimidos por el orden colonial.

En el orden post-colonial, en las nuevas repúblicas latinoamericanas, la organización nacional no fue de la mano de los emancipadores, sino del latifundio y la consolidación de una oligarquía terrateniente, que tuvo como horizonte social, cultural y económico a la “civilización europea”.

Un nuevo ciclo destructivo se abatió entonces sobre las poblaciones indígenas, ahora sostenido en el cientificismo positivista, el racismo y la necesidad imperiosa de la industria europea de reproducir el capital. Frente a esta nueva etapa depredatoria también se alzaron, por supuesto, nuevas resistencias.

Nuestro país, al sur del Cono Sur, no quedó al margen de estos procesos. La consolidación del Estado oligárquico significó la necesidad de adueñarse de todo el territorio posible: Argentina y Chile compitieron por expandirse y ocupar los “desiertos”, esos espacios donde habitaban quienes habían sobrevivido a la colonia.

Aquí, las fuerzas de ese Estado terrateniente-oligárquico descargaron todo su poder de fuego entre 1879 y 1885. La Campaña al “Desierto” ocupó militarmente la Patagonia y el Chaco. Norte y sur fueron incorporados

a la Nación Argentina, aunque con una condición: sin sus habitantes. Es que, al igual que antes, esa humanidad indígena eran los otros, bárbaros, irracionales y salvajes, seres inferiores que obstaculizaban el “progreso”, en suma, menos que humanos (o no-humanos) cuyo exterminio era la necesaria condición de posibilidad de la “civilización moderna”.

Aun así, a pesar de este segundo genocidio -el primero fue el colonial- y de las acciones y relaciones en las que el mismo se ha perpetuado, nuestros pueblos originarios continuaron resistiendo y están acá, presentes, vivos y organizados, luchando contra la invisibilización y la exclusión, por recuperar sus tierras, por el respeto a sus culturas, sus derechos y la decisión de elegir su propio destino.³

El siglo XX latinoamericano condensó esas luchas contra un orden desigual y excluyente en los llamados procesos nacional-populares y en las experiencias socialistas.

En los primeros, los gobiernos nacional-populares -el peronismo argentino, el varguismo en Brasil, el Cardenismo en México, Jacobo Arbenz en Guatemala- se conformaron con movimientos populares que accedieron al Estado y desplegaron un conjunto de medidas que buscaron industrializar las economías latinoamericanas, distribuir la riqueza entre los/as trabajadores/as; ampliar la esfera de cobertura del Estado en materia de salud, educación y servicios sociales, cambiar y mejorar las condiciones laborales urbanas y campesinas: un conjunto de medidas que las academias liberales llamaron despectivamente “populismos”, pero que en la práctica contaron con el apoyo de millones de personas y el repudio de las elites y las potencias imperialistas tradicionales.

En el segundo caso, las experiencias socialistas -la Cubana, la chilena de Salvador Allende y el Frente Sandinista en Nicaragua- intentaron un camino alternativo al del capitalismo, por la vía armada algunos y por las vías democráticas otros, que propusieron modificar en profundidad las estructuras económico sociales de sus respectivos países.

La respuesta de las elites terratenientes, empresariales y financieras fueron las de convocar a las Fuerzas Armadas para interrumpir tanto las experiencias nacional-populares como las de carácter socialista. Durante 1960, 1970 y los años ochenta un conjunto de feroces Dictaduras -las

3 Ansaldi, Waldo; Giordano, Verónica. *América Latina, La construcción del orden I.* (2015) Editorial Ariel, Buenos Aires.

llamadas Dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional- intentaron retroceder el reloj de la historia a través de los golpes de Estado, las persecuciones políticas y la represión genocida.⁴

Durante casi dos décadas los pueblos latinoamericanos vieron desplegarse estas dictaduras -Argentina (1955-1973-1976-1983); Brasil (1964-1985); Chile (1973-1990); Uruguay (1972-1985); Bolivia (1964-1980)- y luego de largas luchas comenzaron a reconstruir sus democracias a mediados de los años 80.

La democracia es un hecho “nuevo” en las sociedades latinoamericanas, y es también un modo de organización de lo social que está en disputa, no ya entre Democracia o Dictadura (disputa de las décadas de los 70 y 80 del siglo XX) sino entre Democracias nacionales y populares o Neoliberalismo.⁵

Por eso decimos que hay raíces profundas del neoliberalismo en América Latina. Circunscribirlo solamente a un fenómeno del presente, sería reducirles la densidad histórica que tienen en nuestro territorio las formas sociales basadas en la desigualdad, la inequidad, el despojo, el neocolonialismo. Formas y modos de ser de nuestras sociedades que pueden rastrearse desde la colonia hasta el presente.

Sobre esas raíces y bases se despliega el neoliberalismo actual, no como una repetición idéntica de los anteriores procesos despiadados de superexplotación y desestructuración social, sino como una reformulación actualizada que encuentra en el pasado sus explicaciones más profundas.

4 David Álvarez Veloso. Juan Carlos Garzón Vergara. Loreta Tellería Escobar. María Paz Fiumara. *El papel de las Fuerzas Armadas en América Latina, Seguridad Interna y Democracia*. (2012) CLACSO, Buenos Aires.

5 Ansaldi, Waldo; Giordano, Verónica. *América Latina, la construcción del orden II*. (2015). Editorial Ariel, Buenos Aires.

II. Las raíces cercanas del neoliberalismo. Chile: 11 de setiembre de 1973. Mucho más que un golpe de Estado.

Como en casi todos los procesos históricos, las fechas y las memorias sufren las distorsiones del poder.

El 11 de setiembre ha pasado a ser una fecha que conmemora el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, hecho relevante por sus implicancias posteriores en los Estados Unidos y en el mundo. Pero este acontecimiento ha dejado en las sombras uno no menos importante: un 11 de setiembre de 1973 se produce un acontecimiento, también con sus consecuencias a futuro, en nuestra América Latina: el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet.

Por muchas razones, el golpe pinochetista será una bisagra en la historia latinoamericana y mundial.⁶

En primera instancia, el golpe militar terminó con la experiencia político-social que más inquietaba a los Estados Unidos en aquella época de “la Guerra Fría” y la “Doctrina de la Seguridad Nacional”: el gobierno de la Unidad Popular (la alianza de partidos de izquierda que había triunfado en las elecciones de 1970) conducida por el presidente Salvador Allende, y que se había propuesto una tarea virtuosa: alcanzar el socialismo por el camino de la construcción democrática.

“La vía chilena”, pacífica, al socialismo, era en ese momento la peor noticia para la perspectiva que los Estados Unidos tenían respecto a la lucha “contra el comunismo” en América Latina y en el mundo: mientras pudiera asociarse socialismo o comunismo con procesos de acceso al poder por la fuerza (léase URSS, China, Cuba) la política de “contención” norteamericana se justificaba desde la lógica de la defensa de la “democracia”, pero con la búsqueda del socialismo precisamente a través de las instituciones democráticas, Allende y la Unidad Popular ponían en jaque toda la estrategia militar agresiva norteamericana contra el “comunismo”.

Así, el golpe fue precedido de una campaña feroz -encabezada por la embajada norteamericana en Chile y el Departamento de Estado-

6 Cavallo, Ascanio, et al. *La Historia Oculta Del Régimen Militar: Chile 1973-1988*. (2004). 3 ra ed., Random House Mondadori S. A.

de desestabilización económico-social: bloqueo crediticio, sabotajes industriales, cierre de importaciones chilenas a EEUU, reducción de exportaciones norteamericanas a Chile, desabastecimiento, financiamiento de huelgas (particularmente la gran huelga de los camioneros) y una campaña de prensa internacional y nacional de la mano del diario conservador El Mercurio, que junto con las protestas y manifestaciones de las clases medias altas y la elite chilena, pusieron en jaque al gobierno de la Unidad Popular.

Aun así, los resultados electorales -consecuencia de las políticas inclusivas del gobierno de Allende- le daban cada vez más apoyo al gobierno democrático y, en ese entendido, las Fuerzas Armadas decidieron dar el golpe de Estado.

El golpe fue brutal y despiadado. Las imágenes de los tanques de guerra bombardeando la Casa de Gobierno con el gobierno dentro, los disparos a los civiles en las calles (incluyendo reporteros), la utilización del Estadio Nacional como gran cárcel y lugar de torturas y asesinatos recorrieron el mundo: 3.000 muertos y desaparecidos dieron cuenta de la brutalidad del golpe Pinochetista, pero la dictadura que se inició ese 11 de setiembre escondía todavía una barbarie aún peor: sería la antesala del primer experimento económico-social neoliberal en el mundo.

A simple vista, el golpe de Pinochet parecía una dictadura pretoriana más, de las tantas de América Latina. Pero las Fuerzas Armadas chilenas se propusieron algo más profundo aún: modificar drásticamente la matriz económico-social del país con un experimento propuesto desde hacía décadas y que nadie había llevado a cabo: un cambio profundo hacia una economía de libremercado: el neoliberalismo.⁷

El eje de ese cambio será la entrega del Ministerio de Economía a un grupo de jóvenes egresados de la Universidad Católica de Chile que hicieran sus posgrados en la Universidad de Chicago con los teóricos neoliberales Milton Friedman y Friedrich von Hayek.

Friedman y Hayek venían pregonando desde hacía décadas la reconstitución de lo que llamaban una economía “libre”, con un equilibrio fiscal riguroso y la privatización de toda la esfera estatizada de la economía.

7 Petras, James. *El milagro económico chileno: crítica empírica*. (Mayo - junio 1991). Revista Nueva Sociedad.

En el año 1975 el propio Milton Friedman asesoró al gobierno chileno y propuso una “terapia” de shock: despedir el 30% de los empleados públicos, reducir el 20% del gasto público, aumentar el IVA, privatizar todas las empresas públicas y los sistemas de salud y educación.

Dos pilares básicos de estas reformas fueron, en primer lugar la modificación del sistema de jubilaciones de reparto administradas por el Estado, hacia un sistema de jubilaciones privado manejado por Administradoras de fondos de pensiones. Así, se trasladó hacia el sector financiero una masa enorme de recursos económicos resultado del trabajo chileno.

En segundo lugar, la reforma sobre el sistema laboral: en el año 1979 se flexibilizó y des-sindicalizó el sistema laboral chileno, bajando costos y salarios.

Para 1980 estas reformas estaban consolidadas: en apenas siete años Chile pasó de la construcción del socialismo hacia una economía y una sociedad privatizada y monetarizada como ninguna otra del mundo. El experimento, de la mano de la férrea represión dictatorial, fue un éxito macroeconómico -se estabilizó la inflación, se reinvirtieron capitales externos- y, un fracaso social -se incrementó la pobreza, creció el desempleo y se redujo el valor del salario y las prestaciones sociales y jubilatorias-.

A partir de ese “éxito” la teoría del shock neoliberal sería utilizada de allí en más en Gran Bretaña (1978, Margaret Thatcher) y Estados Unidos (1981, Ronald Reagan). El neoliberalismo dio sus primeros pasos en el mundo, ya no desde la teoría sino desde la práctica: de la mano de una de las peores dictaduras del siglo XX. La “libertad de mercado” se instaló negando todas las demás libertades.

III. América Latina: de las esperanzas emancipadoras a la reconfiguración de las derechas. Un escenario político-social en disputa.

Si uno se instalaba en el año 2010 en América Latina, parecía que, finalmente, comenzaría a realizarse el viejo sueño de los libertadores y emancipadores latinoamericanos: en Argentina, un gobierno emparentado con la tradición peronista había sucedido al anterior impulsando reformas importantes en materia económico-social; en el Estado Plurinacional de Bolivia gobernaba Evo Morales, el primer indígena presidente desde la Independencia Boliviana; en Venezuela Hugo Chávez mantenía firme el timón de la Revolución Bolivariana; en Paraguay gobernaba Fernando Lugo, el primer presidente electo por el voto verdaderamente libre que no provenía del partido colorado, en el Uruguay asumía su mandato el ala más radicalizada del Frente Amplio con José Mujica; en el Ecuador el gobierno de Rafael Correa se sostenía firme, en el Brasil Lula Da Silva terminaba su exitoso mandato del Partido Trabahlista y le pasaba el gobierno a Dilma Rousseff y en Nicaragua gobernaba el Frente Sandinista de la mano de Daniel Ortega. Cuba continuaba su ruta nacional y antiimperialista.

Con sus diferencias geográficas, territoriales, de recursos y de modos de construcción política, estos gobiernos coincidieron en un conjunto de planteos y lógicas de gestión: recuperación de la soberanía económica nacional, ampliación de la esfera de intervención del Estado en la economía, combate a la indigencia y la pobreza con programas de alcance masivo y/o universal, desendeudamiento externo, ampliación de derechos civiles, sociales y económicos para las mayorías -en muchos casos, como en Bolivia y Paraguay, población indígena- y para las minorías: indígenas y también diversos colectivos de género en países como Uruguay o Argentina.

Al mismo tiempo, estos procesos coincidentes en los grandes ejes emancipatorios desde el punto de vista social y económico, comenzaron a articularse internacionalmente. A la rotunda negativa al ALCA, el proyecto de los EEUU para unificar el continente americano bajo su comando, en el 2005 en Mar del Plata, estos países y gobiernos que aun

reconociendo sus heterogeneidades denominamos “nacional-populares-democráticos”, crearon formas de integración nuevas: El TPC- ALBA; la UNASUR, la ampliación del MERCOSUR y la CELAC.

La política exterior latinoamericana se estructuró por primera vez desde la Independencia en el siglo XIX, en organizaciones de integración que dejaban excluidos de la toma de decisiones a los EEUU, a tal punto que la Organización de Estados Americanos, el tradicional organismo panamericano de influencia norteamericana, quedó casi sin legitimidad alguna.

Para el año 2019, ese panorama alentador de círculo virtuoso entre la integración y la emancipación interna de los países latinoamericanos ha sido seriamente puesto en duda.

¿Los motivos? El retorno de las derechas, así, en plural, pues, como veremos no se comportan todas de la misma manera.

El regreso de las derechas a la política latinoamericana tiene un componente novedoso: descartada la opción del golpe de Estado clásico, en donde las fuerzas armadas obturaban la permanencia de un gobierno democrático/popular, ellas se han propuesto retomar el control de los Estados en una mezcla de procedimientos de variado tipo: el golpe institucional de la mano del Congreso -el caso de Paraguay y Brasil-, el triunfo dentro del sistema electoral -Argentina- y los intentos de sublevación civil para derrocar lisa y llanamente al ejecutivo -la rebelión de la Media Luna Fértil contra Evo Morales o la más actual del caso venezolano-.

En este intento de retorno a la conducción del Estado, las derechas latinoamericanas no están solas. Cuentan, en todos los casos, con una alianza de nuevo cuño: el entramado entre el Poder Judicial y el poder de los medios de comunicación hegemónicos. Esta trilogía, poder económico, sistema judicial y medios monopólicos de comunicación funciona en un doble sentido: por un lado responden a las orientaciones y demandas de la derecha en el proceso de deslegitimar a los gobiernos nacional-populares y, al mismo tiempo, cuando asumen el poder, funcionan como un bloque que provee un blindaje judicial y mediático para llevar adelante las medidas de recomposición neoliberal.

Nos parece relevante analizar comparativamente, en este territorio de disputa, tres experiencias: el caso venezolano y los intentos de

derrocamiento del gobierno democrático, el retorno de la derecha brasileña vía golpe institucional y el caso argentino del retorno democrático de la derecha conservadora.

Venezuela: la derecha antidemocrática busca derrocar al Presidente legal y legítimo.

La situación actual de Venezuela configura un caso típico de maniobras político-mediáticas en donde se articulan las derechas económicas nacionales y extranjeras con los medios masivos de comunicación a escala global y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en América Latina.

En primera instancia, señalamos que el problema de base en la realidad política venezolana se produce por los logros del gobierno bolivariano.

A partir de la elección de Hugo Chávez Frías (1998) y con la posterior sucesión de la elección de Rafael Maduro, se ha desarrollado un proceso nacional, popular y democrático (el socialismo del siglo XXI) que ha transformado y mejorado las condiciones de vida de amplias mayorías de la población venezolana, históricamente invisibilizadas y sumidas en la pobreza estructural. Un país que repartía la renta petrolera entre unas pocas manos y en donde el establishment político del Pacto de Punto Fijo (1958) entre los socialcristianos y los socialdemócratas, con exclusión taxativa del Partido Comunista, construía una democracia para las minorías.

En estos últimos diecinueve años, la Revolución Bolivariana ha nacionalizado los recursos naturales otrora en manos de empresas transnacionales, ha mejorado las condiciones populares de salud y educación, ha sancionado en forma impecable una Constitución que es ejemplo seguido en varios países del mundo, ha intentado democratizar un sistema de medios monopólicos desarrollando las radios y los medios comunitarios y creando cadenas de medios estatales inexistentes previamente en Venezuela, junto con ese gran emprendimiento plurinacional comunicacional que es Telesur.

Venezuela ha apoyado todas las iniciativas de integración que tuvieron como objetivo afianzar la unión latinoamericana sobre las bases de la independencia y autonomía frente a las grandes potencias y bloques de poder hegemónicos: el ALBA, la UNASUR, el Pacto Andino, el

MERCOSUR y las cumbres Latinoamericanas de presidentes encontraron a los gobiernos de Chávez y Maduro como participantes y promotores activos, aun en relación con presidentes y procesos políticos de signo contrario al venezolano.

El origen de la crisis política actual en Venezuela tiene un nombre y apellido conocidos: se llama Mesa de Unidad Democrática.

Un desprevenido transeúnte podría imaginar que con ese nombre, los objetivos políticos de la Mesa son los de proteger la democracia en Venezuela: la experiencia histórica reciente señala que esta Mesa de Unidad es el nombre que se autoimponen los actores sociales y políticos menos democráticos del país.

La derecha venezolana que se nuclea en esta Mesa “democrática” tiene un solo propósito político: expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro antes de la finalización de su mandato. Es en realidad, la Mesa que intenta promover el golpe y derruir la democracia venezolana.

En verdad, el comportamiento político de la derecha venezolana siempre apostó por el golpe institucional: en abril de 2002, ya consagrada la Constitución Bolivariana, Fedecámaras (un conglomerado de empresas nacionales y multinacionales) junto a los sindicatos de derechas y muy especialmente los medios de comunicación masivos venezolanos y norteamericanos, llevaron a cabo un golpe de Estado, que alcanzó a neutralizar al presidente Chávez por unas horas y a promover una asunción presidencial, la del empresario Pedro Carmona, típica de las dictaduras latinoamericanas. La evidente complicidad norteamericana hizo más explícito el carácter reaccionario de la acción. La movilización popular, el rechazo de la mayoría de los países latinoamericanos y la reacción política del presidente Chávez apoyado por las FFAA, abortaron el golpe.

A partir de ese momento, la derecha venezolana se mantuvo siempre en una doble vía política: la participación en los procesos electorales y la búsqueda de un nuevo golpe. Una agenda perfectamente antidemocrática, que ve al proceso electoral solo como una herramienta de corto plazo y que considera el derrocamiento del presidente Chávez en su momento, Maduro en la actualidad, como el único objetivo de su actividad.

En el año 2004, la derecha venezolana convocó a las primeras “guarimbas”: grupos de acción violenta que ocupan las calles, destrozan vidrieras,

interrumpen el tránsito, utilizan armas de fuego y obligan a los negocios a cerrar. Estas primeras acciones directas antidemocráticas dejaron en ese momento un saldo de cincuenta muertos y más de cien heridos.

El 15 de abril de 2013, el ex candidato a la presidencia por la derecha, Henrique Capriles, llamó a lo que denominó “desatar la arrechera” (la bronca) en las calles: ¿el resultado? el asesinato de 11 personas.

Un año después, en febrero de 2014, los líderes opositores llamaron a ocupar las calles en lo que denominaron “la salida”: una movilización que tenía explícitamente el objetivo de derrocar al gobierno constitucional. Cuarenta y tres muertos y ochocientos heridos fue el saldo de este nuevo intento golpista. El líder opositor Leopoldo López fue juzgado y condenado por la justicia venezolana por su responsabilidad en este intento sangriento.

Todavía embarcada en el derrocamiento del presidente, la derecha convocó en octubre de 2016 a una “toma de Venezuela”, con el evidente propósito, nuevamente, de expulsar al gobierno democrático.

Intentando reconducir a la oposición al funcionamiento democrático, el gobierno del presidente Maduro llamó, a fines del 2015, a una Mesa de diálogo con la intervención del Vaticano y la UNASUR como garantías; la Mesa de Unidad Democrática entendió esa Mesa sólo como un nuevo espacio para derrocar a Maduro; y al no avanzar en este sentido, se retiró de la misma.

En este trasfondo es que debe encuadrarse la actual crisis desatada en Venezuela: una derecha antidemocrática, golpista y descomprometida con los procesos legales.

Hoy, la derecha apuesta a profundizar el conflicto de poderes: en Venezuela los poderes constitucionales son cinco, el Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Nuevamente el proceso electoral es tomado sólo como una herramienta que puede utilizarse para profundizar la búsqueda de un golpe institucional. En las elecciones de medio término del año 2015 la Mesa de Unidad Popular triunfa y logra la mayoría en uno de los cinco poderes, el Parlamento unicameral.

En cualquier país democrático, con el triunfo de la oposición, se iniciaría un período de cohabitación entre ella y el gobierno, pero la derecha venezolana le aplicó al Parlamento su lógica: la mayoría en la Cámara fue

un instrumento más en el viejo proyecto de derrocar al presidente. Los tres diputados electos por el estado de Amazonas de la Mesa de Unidad Democrática, lo fueron en un proceso de fraude electoral. El Parlamento, dominado por la derecha, desestimó los reclamos de no tomar juramento a los diputados hasta que se expidiera el Poder Electoral sobre las acusaciones de fraude. Intervino el Tribunal Superior de Justicia (La Corte Suprema de Venezuela) declarando que si el Parlamento no reveía esas tomas de posesión sospechadas de fraude, habría una declaración de desacato.

Se desata así un conflicto que involucra a los cinco poderes del Estado, cuatro que sostienen la legalidad democrática y uno (el Parlamento en manos de la derecha) que sostiene, contra la opinión del Tribunal Superior de Justicia, la elección por fraude de tres diputados.

Llegamos a la situación actual: el Tribunal Superior de Justicia, utilizando sus atribuciones, declara que a raíz del desacato del Parlamento, éste carece de legalidad: era la medida que la derecha buscaba desde las elecciones de 2015.

A partir de ese momento, los gobiernos de derecha en la región (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay) se hacen eco de la muletilla de los grandes medios de comunicación asociados a la ola neoconservadora en América Latina: en Venezuela había un “Golpe de Estado”.

Repentinamente, gobiernos surgidos de procesos destituyentes como el de Paraguay, gobiernos ilegítimos como el de Brasil, gobiernos con presos políticos y violaciones a los derechos de huelga y de reunión como la Argentina, se transforman en adalides de la democracia.

Junto a este coro de demócratas de ocasión, reaparece a la vida la Organización de Estados Americanos (OEA), quien de la mano de su presidente Almagro inicia un proceso de presión e injerencia externa de la mano del Departamento de Estado de los EEUU y la derecha venezolana: proponen iniciar un proceso de “separación” de Venezuela de la OEA por el “golpe o autogolpe”, curiosa determinación que la OEA no tomó en el caso de Dilma Rousseff, el Presidente Lugo, el presidente Zelaya de Honduras, en fin, la OEA como instrumento de lucha contra los gobiernos populares siguiendo la agenda norteamericana.

En el plano regional sudamericano, se suman a la estrategia de la derecha antidemocrática los gobiernos de Argentina y Brasil, que proponen

separar a Venezuela del Mercosur, aplicándole la “cláusula democrática”. Curioso modo de dictaminar lo que la democracia es: el presidente Temer surgió de un verdadero golpe destituyente en Brasil, el presidente Cartes de Paraguay fue electo luego de la destitución express del presidente Lugo, y el gobierno de Macri mantiene presos políticos desde el primer mes de su gestión de gobierno.

No hay ningún golpe ni autogolpe en Venezuela. No se han suspendido los principios democráticos de un gobierno electo limpiamente por el voto popular. Lo único persistente allí es la decisión de la derecha más reaccionaria de apostar permanentemente por la interrupción ilegal del gobierno nacional popular y democrático y la determinación de los medios de comunicación hegemónicos en toda América Latina de operar para justificar el fin de la revolución Bolivariana, para iniciar una revancha oligárquica en toda la línea.

En las elecciones de gobernadores del año 2017 el triunfo le correspondió a los candidatos del chavismo en dieciocho Estados, y en cinco Estados a la opositora Mesa de Unidad. La estrategia del derrocamiento no parece funcionar en Venezuela: las votaciones demuestran un claro rechazo popular a la derecha, lo que explica la imposibilidad de una sublevación “popular” en contra del gobierno bolivariano.

En mayo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales.

El clima creado por los medios internacionales, la movilización destituyente de las derechas y la política injerencista de los Estados Unidos habían decidido de antemano no reconocer el resultado electoral si era adverso. Las elecciones, correctamente desarrolladas, le dieron el triunfo a Nicolás Maduro. La respuesta de los Estados Unidos fue promover la existencia de un nuevo presidente: el diputado Juan Guaidó, que votado por nadie, fue “designado” presidente “encargado”. Los Estados Unidos lo han reconocido como tal y, curiosamente, los medios masivos de comunicación social hablan del “régimen” de Nicolás Maduro (electo por más de 6.000.000 de votantes) y del “demócrata” Guaidó autoproclamado presidente sin un solo voto.

Brasil: Michel Temer y el retorno de la sociedad esclavócrata

El caso brasileño es la expresión más acabada de la nueva modalidad de

golpe institucional de la derecha latinoamericana.

El gobierno del Partido Trabalhista (dos períodos presidenciales de Lula Da Silva y luego la presidencia de Dilma Rousseff) desarrollaron un ciclo de 13 años de gobierno nacional-popular. En ese lapso la sociedad brasileña consiguió logros inéditos en su historia: 28 millones de brasileños salieron de la situación de pobreza, un crecimiento económico sostenido entre 2003 y 2014 y una ubicación geopolítica de potencia mundial.

Este proceso de redistribución de la renta y mejora en las condiciones de vida comenzó a ser atacado desde el Poder Judicial en consonancia con un sistema mediático hiper-concentrado -la Red O Globo- que reproducía y amplificaba las múltiples denuncias por casos de corrupción .

La estrategia se completó con el inicio de un proceso de impeachment a cargo del Senado. Este proceso finalizó cuando el Senado brasileño destituyó a la presidenta electa legal y legítimamente, Dilma Rousseff. En aquellas escandalosas sesiones, pudimos escuchar en vivo y en directo la sobreabundancia de expresiones machistas, racistas y pro-dictatoriales de Senadores que no pudieron probar ninguna contravención a la ley de la presidenta electa por el voto popular. Su destitución fue, ni más ni menos que un golpe institucional, ilegal e ilegítimo. No hicieron falta los militares: la ruptura del gobierno votado por millones de brasileños estuvo a cargo de los senadores de la derecha, en consonancia con los diputados, el sistema judicial y, como una constante en las últimas décadas latinoamericanas, los medios masivos de comunicación.

Asumió la presidencia Michel Temer, el vicepresidente que en lugar de defender el orden constitucional y el gobierno elegido democráticamente, se sumó, instigó y apoyó el golpe institucional.

Se inauguró así un período de incertidumbre política e inestabilidad institucional que seguramente continuará hasta nuevas elecciones.

Esta inestabilidad e incertidumbre tienen un objetivo a largo plazo: ser la herramienta para un intento de cambio trascendental en la sociedad brasileña, profundizando las políticas neoliberales y desestructurando el Estado construido durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Lejos de tratarse de una acción improvisada o desesperada de la derecha brasileña, el gobierno de Temer, aún con su escaso tiempo y su nula posibilidad de continuar por las vías del voto popular, demuestra

que el objetivo del golpe institucional contra Dilma estaba claro para el establishment más allá o más acá de los disparatados discursos senatoriales o las descabelladas fábulas de la Red O Globo: el objetivo del golpe fue cambiar en profundidad la matriz societal que el Partido Trabalhista estaba consolidando en Brasil y hacerlo en un modo estructural de las dimensiones del ajuste argentino de Menem y Cavallo, ajuste, que, por diversas razones, no se hizo en Brasil ni en los ochenta ni en los noventa del siglo XX.

Tres grandes iniciativas demuestran este intento por retrotraer al Brasil a modalidades más cercanas a una “esclavocracia” que a una democracia moderna: un mes después de asumir el cargo en forma ilegítima, el presidente Temer propuso una enmienda constitucional que llamó “Techo de Gastos”. Con ese eufemismo se escondió la Ley que limita el aumento de los recursos estatales a la tasa de inflación oficial del año precedente. La Ley (aprobada por Diputados y Senadores) limita la inversión pública por veinte años.

Como es fácil de prever, si el Estado tiene que incrementar la inversión en educación y salud por ejemplo, sólo podrá hacerlo hasta el tope planteado por la inflación del año anterior, despegado de las necesidades reales y concretas de una población con enormes carencias o desentendido del crecimiento poblacional.

El efecto buscado, (como en toda reforma neoliberal) es reducir el “gasto” estatal para, supuestamente, mejorar los índices económicos. En la práctica, menor inversión estatal no sólo afectará los servicios públicos esenciales, sino que paralizará la obra pública y, por lo tanto reducirá aún más la ya retraída economía brasileña.

Tres meses después de asumir el cargo, Temer envió al Congreso un proyecto de Reforma de la Legislación Jubilatoria que propone una modificación profunda de los derechos de los pasivos. Hasta esta reforma, en Brasil los/as trabajadores podían jubilarse con 30 años de aportes las mujeres y 35 los varones, independientemente de la edad. La reforma jubilatoria establece una edad mínima de 65 años para retirarse (varones y mujeres) y un mínimo de 25 años de aportes. La reforma tiene un claro objetivo fiscal: aumentar la recaudación manteniendo y/o reduciendo los pagos a las personas que podrían adherir a la jubilación, extendiendo la edad.

En julio de 2017 el Senado aprobó la propuesta de Reforma laboral de Temer. El sistema laboral brasileño fue diseñado durante la presidencia de Getulio Vargas, otro gran presidente odiado por la oligarquía brasileña: se basaba en el principio del pago mensual a los trabajadores/as, la estabilidad (salvo motivos fundados e indemnización previa) y la afiliación obligatoria a los sindicatos de cada rama o área. Las Leyes laborales de Getulio, sancionadas en 1943, estaban, aún en estos años, vigentes.

La nueva Ley Laboral (2017) habilita la jornada intermitente, esto es, la contratación por jornada o inclusive por hora; habilita dividir las vacaciones hasta en tres tramos, la posibilidad de extender la jornada hasta las 12 horas diarias y el fin de la obligación de estar agremiado y pagar el sostenimiento del sindicato, equivalente a una jornada laboral por año para cada trabajador. La Reforma -que retrocede al Brasil de antes de la década de 1940, fue elaborada por la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura, las organizaciones patronales del capital. También recibió el apoyo de la Federación Nacional de Bancos y los oligopolios mediáticos.

Sobre estos tres pilares se explica el golpe institucional de Temer. Temer es, en este sentido, la expresión más cruda de las necesidades del gran capital en el Brasil.

Un flanco no menor de esta situación es el efecto sobre el resto de América Latina y, en particular, en la Argentina neoconservadora: ajuste estatal, reforma jubilatoria y flexibilización laboral son, precisamente, el paquete de medidas que ha venido anunciando el gobierno neoliberal argentino. Si el modelo es Brasil, los resultados serán mayor pobreza y desintegración social.

De Temer a Bolsonaro -lo veremos más adelante en este texto- había que dar un paso, y éste fue dado por el establishment brasileño.

Argentina: la vía democrática hacia el neoliberalismo

La derecha argentina, consciente de que recurrir a las Fuerzas Armadas y a los golpes brutales típicos de la tradición del siglo XX, no tenía margen en la sociedad en general, se aprestó a dar la batalla para triunfar, por primera vez, en un proceso eleccionario universal, transparente y sin fraude.

A diferencia de las derechas latinoamericanas de Paraguay, Honduras y Brasil y los intentos actuales de la golpista venezolana, en nuestro país, el cambio de signo político se hizo de la mano de una elección limpia.

El gobierno surgido de las urnas considera esa legitimidad de origen y esa legalidad institucional como una muestra clara de su apego “democrático”: el gobierno de derechas confunde (y cada vez más) legitimidad de origen con legitimidad de toda acción de gobierno o sus instituciones afines.

De este modo, cada acción de gobierno o de las instituciones de la república son consideradas democráticas per se, sin analizar o dar lugar al debate sobre su contenido y sentido. El resultado de esta concepción, una democracia “congelada” en su legitimidad de origen, es precisamente la que justifica medidas y acciones de gobierno que son, cada vez más, incompatibles con la vigencia de la democracia. Nos acercamos, aceleradamente, a las situaciones descritas para el caso colombiano o mexicano.

Los casi cuatro años de gobierno argentino han mostrado una definida política de desconocimiento y negación de los derechos laborales: la muestra explícita es su decisión de no respetar la ley, dejando de convocar paritarias nacionales en gremios claves, docentes por ejemplo.

En los primeros días de su mandato, el gobierno toma la decisión de “disciplinar” la protesta social y elige como caso testigo a las/os líderes de la organización social Túpac Amaru. La detención de Milagro Sala es a todas luces arbitraria e ilegal aunque haya sido hecha por instituciones de la república.

Este disciplinamiento del derecho a la protesta y el reclamo a las autoridades, se profundiza con las represiones en situaciones como las de Cresta Roja, planta avícola de Tres Arroyos, con más de mil trabajadores cesanteados, y la brutal represión a docentes en plena Plaza de Mayo. En este contexto represivo, la protesta de los pueblos originarios (en este caso mapuches) arrojó la primera desaparición forzada de este período de gobierno: el caso de Santiago Maldonado conmovió al país y demostró la profundidad de las políticas represivas del gobierno neoconservador.

Es determinante la toma inconsulta e indiscriminada de Deuda externa, cifras que auguran crisis y privaciones para las generaciones futuras, y el pago al contado a los especuladores que apostaron contra el propio país (los llamados “Fondos buitres”) en detrimento del uso de esos recursos

para áreas como educación, salud o desarrollo productivo.

Finalmente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poder de la democracia, que acepta la utilización del 2 por 1 en los casos de represores condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que podría liberar anticipadamente a genocidas mundialmente repudiados, -posición que fuera abandonada por la Corte a raíz de las masivas marchas de protesta-, abona y es resultado a la vez de este “clima de época” de retroceso democrático en el país; retroceso que los dichos y acciones xenófobas, machistas y racistas de varios miembros del actual gobierno, profundizan.

En esa puja entre proyectos inclusivos, democráticos y populares versus las derechas promoviendo desde el Estado la reconstrucción de la exclusión neoliberal, se definirá el futuro de nuestro continente latinoamericano.

IV. Bolsonaro: ¿Nazismo? ¿Fascismo? No. Ultraderecha neoliberal latinoamericana

El triunfo de Bolsonaro en Brasil ha reinstalado -como en el caso de Donald Trump aunque con más énfasis- la utilización de términos de la teoría política que hacía décadas no se utilizaban para describir a un gobierno originado en el voto.

Las palabras fascismo y nazismo fueron profusamente utilizadas por los opositores a la candidatura del ex -militar brasileño, basándose en sus dichos racistas, misóginos y pro-dictatoriales, y siguen siendo utilizadas hoy ante cada intervención desafortunada del recientemente electo presidente.

Pero, como siempre que se utilizan términos de la teoría política europea, conviene aclarar en qué sentido se utilizan aquí en América Latina -o quizás señalar por qué no es necesario utilizarlos- , so pena de concebir una caracterización errada de los gobiernos latinoamericanos.

Una caracterización anacrónica de los gobiernos ultraderechistas latinoamericanos podría significar también una modalidad de disputa discursiva y política que no sea eficaz para el enfrentamiento con gobiernos (como el de Macri y Bolsonaro) que han alcanzado lo que durante décadas intentaron sin éxito las elites latinoamericanas: que el voto popular universal desemboque en gobiernos de derechas.

Nazismo y fascismo han sido durante la campaña en Brasil, los dos términos más utilizados para caracterizar a Bolsonaro: antes de seguir utilizándolos, habría que cotejar sus alcances en relación a nuestra situacionalidad.

Nazismo y fascismo son dos experiencias que, en su sentido restringido y original se desplegaron en la Italia de Benito Mussolini y en la Alemania de Adolf Hitler. Son por lo tanto, expresiones políticas de naciones industrializadas que llegaron tarde al “reparto del mundo” y pretendieron ser imperialistas.

He aquí una de las grandes diferencias con la ultraderecha neoliberal latinoamericana: Bolsonaro, Piñera o Macri no expresan proyectos nacionales expansivos, industrialistas e imperialistas sino proyectos de sociedades neocoloniales, sometidas a la depredación y al saqueo de las grandes corporaciones transnacionales. No son imperialistas, en toda la dimensión del término, sino por el contrario, proponen hacer de sus

países la factoría que alimenta y sostiene a las potencias imperialistas.

Nazismo y fascismo promovían la autarquía económica, en particular en materia de industrialización. Fueron expresiones del nacionalismo tardío en la Italia y Alemania de la primera Pos Guerra. Un nacionalismo agresivo y expansivo, defensivo con relación a las economías de las otras potencias económicas capitalistas.

Bolsonaro y las derechas neoliberales proponen un modelo económico opuesto a la autarquía, basado en la apertura económica y financiera de la mano de los capitales externos.

Nazismo y fascismo hicieron del Estado el eje conductor del proceso económico-social: en acuerdo con el gran capital nacional -tanto alemán como italiano- promovieron la intervención y la inversión estatal en materia industrial y financiera, señalándole al capital las áreas específicas sobre las que se requería inversión y aquellas en las que no.

Las derechas neoliberales neoconservadoras en América Latina SON el capital o, si no lo son, tienen una posición absolutamente genuflexa con respecto al mismo: no pretenden orientarlo ni dirigirlo sino para ampliar su rentabilidad y, en cuanto al Estado, su lógica es reducirlo al mínimo suprimiendo todo aquello que obstaculice el libre despliegue del capital. La “mediación” entre capital y Estado ha desaparecido.

En materia social, el nazismo y el fascismo promovieron una fuerte ampliación de los servicios de educación y salud estatales basándose en tres principios orientadores:

- había que adoctrinar a las/os jóvenes acerca del nuevo orden nacionalista e imperialista,
- debía velarse por una política de salud que garantizara un “perfeccionamiento” biológico de los/as ciudadanos/as para que la nación tuviera una población “sana”, apta para el trabajo, la industrialización y la guerra,
- y por último, estos sistemas sociales y de salud estaban restringidos a los/as “ciudadanos/as de la nación”, criterio un poco difuso en el fascismo italiano y absolutamente claro en el nazismo alemán: la ciudadanía era sólo para la “raza aria”.

Las ultraderechas neoliberales latinoamericanas consideran a la educación y la salud públicas como un gasto inequitativo. En su concepción, salud y educación deberían privatizarse. Proponen precisamente lo opuesto al

nazi-fascismo: dejar la educación formal librada al campo de la inversión privada y entregar la “educación” de la ciudadanía a los medios masivos de comunicación y las iglesias evangélicas. Una realidad externa al propio Estado, que garantice la desnacionalización bajo cualquier criterio.

De igual modo, concebir la salud como un servicio mercantilizado sin ninguna preocupación adicional por el destino de los/as ciudadanos en términos sanitarios.

Este criterio eficientista se aplica a los sistemas de políticas sociales y programas compensatorios: las ultraderechas neoliberales latinoamericanas carecen de concepto de “nación”, aún del tipo nazi: basada en la “raza”(Alemania) o el “pasado imperial” (Italia) o la “necesidad de expansión territorial” (nazismo y fascismo); por lo tanto, su visión sobre los sistemas de políticas sociales es simplemente que... éstas no debieran existir!

El discurso y la práctica de estas ultraderechas promulga el principio neoliberal clásico: los sujetos sociales colectivos no existen, la “salvación o la condena” es de carácter individual y toda práctica de ayuda, acción, apoyo o política social promueve inequidades y debilita las capacidades individuales para ser “emprendedor” o “uno mismo”.

El relato evangélico y los medios oligopólicos completan esta tarea de demolición de políticas públicas sociales. Pero es en el campo de las concepciones racistas en donde la caracterización de Bolsonaro, por ejemplo, hace más agua.

El nazismo fue en este punto, una experiencia radical: todo el orden social del nazismo se explicaba desde una concepción racial: en la cúspide de la humanidad estaba el ario puro; el resto del mundo era habitado por diversas mezclas impuras y otros millones de seres carecían de la condición humana: judíos, eslavos, negros, gitanos. (En el tema de la “raza” el fascismo italiano fue mucho menos preciso, aunque eso no le impidió seguir prácticas profundamente xenófobas).

Esta lógica de hierro derivó en una postura inflexible: todos/as aquellos que pertenecían a las “razas inferiores” no podían formar parte de la Nación y, además, en algunos casos, judíos o gitanos, eran perniciosos “sólo por existir”. La consecuencia de esta concepción fueron 10.000.000 de personas asesinadas sólo en los campos de concentración alemanes.

Las ultraderechas neoliberales latinoamericanas -Bolsonaro al frente-

tienen un obstáculo profundo para hacer racismo al estilo nazi: no hay “pureza racial” a la que recurrir. El mestizaje en un sentido profundo es la regla en América Latina: apelar a la pureza racial es apelar a un mundo que no existe en nuestras tierras. Nuestro racismo, aún influenciado por el positivismo cientificista de fines del siglo XIX, es de otra índole: proviene de la época colonial y está basado en concepciones religiosas -el indio y el negro habían sido destinados por la providencia para servir al europeo- y actitudinales: pereza, alcoholismo, desidia y una sexualidad “perversa” fueron asociadas por los conquistadores españoles y portugueses a todo lo “no blanco”.

Durante el siglo XX este racismo religioso-actitudinal alcanzó una mayor justificación señalando que esos grupos sociales “entorpecían” el progreso. De allí a considerar la pobreza una característica racial había un pequeño paso: ése es el racismo de la ultraderecha neoliberal latinoamericana, un racismo que es, en realidad, expresión de odio social al pobre y que estigmatiza el “fracaso económico individual” en los términos neoliberales.

En un círculo cerrado explicativo, pobreza y “no blanco” son una misma cosa; pero, neoliberales al fin, no existe el problema con los ricos “no blancos”. No hay esencialismo racial, los colores varían según el grado de riqueza. Sentirse blanco o no sentirse indio o negro es una cuestión de ingresos y no de inmovilismo racial. Bolsonaro expresa mucho de esta concepción, lo que en parte explica el apoyo que recibe de aquellos que pertenecen a las poblaciones mestizas y negras. Un racismo que -esto sí compartido con otras experiencias racistas- tiene por objetivo último sostener el statu quo, legitimar la creciente inequidad social que el neoliberalismo latinoamericano construye día a día y justificar el creciente anillo represivo sobre las poblaciones pobres del continente para aislarla de los barrios y territorios ricos.

La sorpresa de muchos analistas por el apoyo de mestizos, negros y mulatos a Bolsonaro, parte del error de asignarle al racismo neoliberal un componente esencialista.

Para cerrar este modo particular no-nazi del racismo debemos señalar que las ultraderechas neoliberales latinoamericanas se llevan de maravilla con las ultraderechas israelíes en Medio Oriente y con las comunidades israelíes de ultraderecha en cada país. El racismo neoliberal no es un fin a lograr (pureza racial o nacional) sino una concepción instrumental:

sirve para reforzar el odio social de los ricos, para aglutinar a los sectores populares contra los “otros”: blancos pobres contra indígenas y negros, indígenas contra mestizos, negros contra blancos, argentinos contra senegaleses, chilenos contra bolivianos, hondureños contra guatemaltecos... y la lista del odio es infinita; aunque en todos los casos el rasgo común es que todos/as los estigmatizados/as pertenecen al universo de los pobres, los vulnerables, los migrantes, los exiliados.

La relación con los grandes medios de comunicación es otro modo de señalar las diferencias con la categoría nazismo. El nazismo y el fascismo descreían completamente de la libertad de expresión y más aún de la libertad de empresas periodísticas, aquel credo del democratismo liberal. Consideraban que los grandes medios de comunicación jugaban a favor de las democracias anglosajonas y contra los nacionalismos emergentes asignándole a la prensa una pertenencia a lo que llamaban la conspiración “judía-comunista internacional”. Esa mezcla de descreimiento y lógica conspirativa derivó en una política de control absoluto de los medios de comunicación de la época: cierres, asesinatos, proscripciones y finalmente la construcción de un sistema de medios absolutamente manejado por el Estado totalitario.

La ultraderecha neoliberal latinoamericana es, por el contrario, casi un producto de los grandes medios oligopólicos de comunicación: no sólo no proponen estatizarlos sino que, por el contrario, quieren privatizar lo que está en manos del Estado.

Es tal la vinculación entre medios hegemónicos-empresariales y capital oligopólico nacional y transnacional, que los líderes de la ultraderecha pregonan a viva voz la “libertad de expresión”, seguros de que en la práctica están garantizando no sólo su acceso al poder sino el mantenerse en el mismo.

Lo que el nazismo lograba controlándolo todo, ellos lo logran liberando a la empresa oligopólica de cualquier tipo de control o intento democratizador de la palabra.

Por último, para finalizar provisoriamente con esta caracterización de las ultraderechas neoliberales latinoamericanas en torno al nazismo-fascismo; señalemos los alcances de su posicionamiento internacional: a diferencia de las experiencias nazi-fascistas que se propusieron reclamar el “reparto del mundo” y disputarle a las potencias colonialistas tradicionales el dominio mundial -lo que llevó al nazismo a un

enfrentamiento absoluto contra Gran Bretaña y los Estados Unidos -la ultraderecha neoliberal latinoamericana se coloca en una posición de subordinación con respecto al liderazgo panamericano de los Estados Unidos. Esa subordinación incluye el acatamiento a las directivas de los organismos de crédito financieros internacionales y el incremento de la dependencia de los mismos vía Deuda externa.

Lejos de una postura nacionalista -por completo contraria al orden neoliberal hegemónico- las ultraderechas neoliberales latinoamericanas están a favor de una profundización de la dependencia con respecto a los EEUU y a la demolición de toda construcción de poder político-económico latinoamericano (MERCOSUR-ALBA o UNASUR) que pudiera limitar siquiera la injerencia norteamericana.

Bolsonaro no es pues, la expresión latinoamericana del nazismo: es una mezcla no tan nueva de los deseos y las prácticas de la vieja oligarquía brasileña, junto al programa y discurso de las dictaduras de las décadas de los sesenta y setenta en un contexto de expansión del mundo financiero neoliberal. Cuenta con el apoyo incondicional de los grandes medios masivos de comunicación, la embajada norteamericana y el sistema judicial. Esa es la razón última de su triunfo electoral, como expresión del viejo discurso oligárquico del orden, la seguridad y el progreso.

Es, en última instancia, la adaptación de las derechas latinoamericanas a la lógica neoliberal que busca terminar con el único espacio en donde han habido propuestas alternativas en el mundo: el Brasil de Lula, la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Correa.

¿Por qué esta vieja-nueva propuesta ultraderechista neoliberal oligárquica accede al poder con más del 50% de los votos?

La respuesta a esta pregunta provoca nuevos análisis: en este apartado señalamos la inconveniencia de identificarla livianamente con el nazismo.

V. Democracia, pueblo y derechas en América Latina: repensar los marcos de análisis.

La elección de Bolsonaro en Brasil impacta de lleno en la política presente de América Latina. Sus efectos a mediano y largo plazo están por verse. Pero es indudable que las elecciones de la diada Macri-Bolsonaro ponen una llamada severa de atención sobre el análisis político-social de los movimientos nacional-populares-democráticos y, sobre todo, sobre los marcos de análisis desde los que se construyen las propuestas políticas de carácter popular en América Latina.

Que la derecha, desnuda de toda pretensión y maquillaje electoralista, triunfe rotundamente en Brasil nos pone en un escenario nuevo y demanda al menos poner en tensión marcos analíticos de vieja data.

¿Es nueva esta situación en América Latina? Por desgracia no.

Hay un ejemplo lejano: luego de una lucha de décadas contra la dictadura de Somoza, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) destronó la dictadura, luchó contra la intervención norteamericana, inició procesos de redistribución del ingreso, alfabetización y mejora del sistema de salud y llamó a elecciones por primera vez en la historia nicaragüense. Pero en las elecciones de 1990 -las primeras absolutamente libres de toda la historia nicaragüense, logradas por el propio FSLN- ganó el Frente de Derechas con la candidatura de Violeta Chamorro y con la vuelta al poder de buena parte de los ex simpatizantes de la dictadura Somocista, esta vez por el voto popular.

Hay ejemplos cercanos en nuestra Argentina: el genocida Domingo Bussi, fue el responsable de la represión ilegal durante la última dictadura militar en la provincia de Tucumán. Un hombre extraviado en su discurso y su práctica fascista, un ex gobernador de facto al que se le atribuyeron y probaron cientos de asesinatos y desapariciones: sin embargo, vuelta la democracia, el general genocida fue electo diputado, luego convencional constituyente, gobernador de la Provincia en 1995 (la misma que devastó en 1976) y, finalmente, intendente de Tucumán (2003) cargo que no pudo asumir debido a que se reactivaron los juicios contra los represores que lo llevaron a la prisión perpetua.

Domingo Bussi, genocida comprobado, ganó ocho elecciones con el voto popular.

Otro represor de la dictadura militar, Luis Abelardo Patti, responsable de crímenes horribles durante la misma, se presentó como candidato a intendente del distrito de Escobar y ganó la intendencia con un asombroso 73% de los votos. Otro personaje extraviado cuyo único slogan de campaña era el “combate a las drogas”, “la lucha contra los delincuentes”, el orden por el orden mismo. En el año 2003 Patti salió segundo en su candidatura a gobernador de la mayor provincia del país con el 12 % de los votos y, en el año 2005 ganó una banca como diputado nacional que no pudo asumir por la negativa del Congreso Nacional a darle ingreso a un represor.

Hay un ejemplo más cercano aún: luego de la peor crisis de su historia nacional (2001) en la Argentina tiene lugar un proceso de doce años (2003-2015) que se caracterizó por un crecimiento económico ininterrumpido, reducción del desempleo, reducción de los índices de indigencia y pobreza, juzgamiento a los genocidas de la dictadura y una serie de conquistas de derechos sociales y de género.

Sin embargo, el partido que llevó a cabo ese proceso de mejora general de la ciudadanía fue castigado en las elecciones de 2015 con la derrota electoral. Los/as ciudadanos/as le otorgaron el triunfo con el 51% de los votos a Mauricio Macri, representante del capital concentrado nacional e internacional, con un discurso entre neutro e insípido con comentarios misóginos, xenófobos y una larga práctica de negocios poco claros a costa de las arcas estatales.

El caso brasileño remeda al caso argentino (lo supera en la figura grotesca de Bolsonaro, que aparece como un Macri desinhibido en términos represivos): el Partido Trabalhista (PT) se hizo del gobierno en el año 2003 de la mano de Lula Da Silva, un obrero metalúrgico que creció políticamente en San Pablo y se presentó cuatro veces como candidato a presidente triunfando finalmente con un programa de izquierdas.

Ese programa, que dejó de lado las aristas más radicalizadas, llevó al Brasil a ser la sexta economía del mundo, a 30.000.000 de brasileños a integrarse a los sectores medios y a una reducción significativa de la pobreza y la indigencia. La sucesora de Lula Da Silva, Dilma Rousseff -la primera mujer presidenta del Brasil- prosiguió con vaivenes, quizás con algún acercamiento a políticas más ortodoxas, el programa de ampliación de derechos, de reducción de la pobreza y de mejora de las poblaciones mestizas y negras (las tradicionales excluidas desde los

tiempos esclavistas).

En un golpe institucional que no se salió de las reglas formales republicanas y que el gobierno petista no pudo frenar, Dilma fue destituida, lo que habilitó las elecciones que terminaron con el triunfo del ultraderechista Bolsonaro. El Partido Trabhalista resultó así, como en el caso argentino -aunque con variantes cuasi golpistas-, castigado en las urnas.

El 28 de Octubre de 2018, el candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro triunfó con el 56 % de los votos. ¿Su discurso?: mano dura, xenofobia, misoginia, burlarse de los negros y mestizos en un país de negros y mestizos, ¿su programa? ninguno, salvo la certeza de reconstruir la matriz societal blanca, patriarcal y esclavócrata del Brasil. Y sin embargo, ha triunfado en las elecciones.

Guiados por la angustia, la desazón y la incertidumbre, podríamos tentarnos a la fácil, recurrente y además poco explicativa, tesis de que “el pueblo votó mal”. La tesis del “voto equivocado” o del pueblo “alienado” nos deja con la tranquila y cómoda conciencia de que nosotros, un nosotros nacional-popular, progresista y consciente, sí sabemos lo que está bien y lo que es correcto.

El problema es que los hechos, los millones de hechos que significan cada voto dado a Jair Bolsonaro como los que obtuvieron otros anteriores fascistas y represores consumados en nuestra América Latina, siguen estando ahí, no sólo presentes sino crecientes: Bolsonaro subió 11 puntos en veinte días para triunfar en el ballotage.

¿No será hora de revisar algunos de nuestros supuestos?

Cuando la realidad se resiste a encuadrarse en nuestros marcos de análisis, ¿no será tiempo de ver si esos marcos sirven? ¿o seguimos estrellándonos contra el mundo real? ¿si millones de personas (las grandes mayorías) votan por opciones claramente neofascistas y antisociales, señalamos con el dedo acusador a los/as millones? ¿o buscamos razones que den cuenta de la existencia de otras razones, un poco más complejas que la lógica paternalista y elitista que explica todo a partir del voto errado?

“El pueblo siempre tiende a votar programas políticos democráticos, de distribución de la renta, que lo beneficia, y con un sentido colectivo”: este supuesto, el supuesto pueblo=elección democrática, hijo del pensamiento iluminista, retomado por los republicanos franceses y llevado a su expresión “científica” en el marxismo aunque aplicado en

principio aquí a la “clase obrera” específicamente, es quizás, el primer gran concepto a revisar, centralmente porque es un concepto en última instancia apolítico: si la tendencia histórico social de los pueblos es la democracia económica y social, podemos descansar en la certeza de que bastaría con generar las condiciones del voto democrático libre y universal para que los partidos “populares” se hagan con el gobierno.

Como pensamiento de raíz iluminista, cuando el voto mayoritario acompaña procesos elitistas o directamente fascistas las explicaciones girarán en torno a los “errores” de concepción populares, la “falta de educación” o la “confusión” de los/as electores.

“Los pueblos, puestos a votar libremente, votan a favor de programas económicos que los beneficiarán económicamente”: este supuesto, el del voto economicista, es otro supuesto que, llevado al extremo, deja sin espacio a la política: basta con generar políticas públicas que otorguen beneficios económicos a las clases más desfavorecidas para que el partido popular sea premiado con el voto popular.

Nuevamente, ante la evidencia empírica en donde los pueblos votan a multimillonarios, megaempresarios y financistas que gobiernan para ellos mismos, aparece el concepto de “alienación”, concepto que deja nuestros marcos analíticos en paz y vuelve a señalar que el problema está en que las mayorías no entienden cuál es su propio beneficio o sus “verdaderos intereses”.

Detrás de ambas concepciones se esconde agazapada, la conciencia tácita del peor enemigo de la política como posibilidad, el determinismo cientificista que se niega a morir en nuestras tierras latinoamericanas: la idea de la inevitabilidad del progreso social.

Subyacente a la idea del voto “con sentido democrático per sé del pueblo” o del “voto de las clases no hegemónicas por sus propios intereses” descansa la idea del progreso: las sociedades históricamente consideradas han transitado desde las monarquías paternalistas hasta las democracias modernas. La democracia moderna es el progreso y el pueblo que vota es, por definición “progresista”.

Así, democracia, redistribución del ingreso, progreso social, son atributos propios de las mayorías populares en sí mismas, como un atributo de su existencia.

¿Pero qué ocurre si dejamos de lado nuestros a priori heredados del

iluminismo y el cientificismo? ¿Qué pasaría si para iniciar la explicación de lo que ha ocurrido en Brasil con la elección de Bolsonaro partimos de la idea de que la democracia es una construcción política de contenido cambiante, relativo y sujeto a correlaciones de fuerzas varias? ¿Qué ocurre si partimos de la idea de que no es una necesidad histórica que los pueblos voten inevitablemente programas más democráticos y más favorables económicamente a ellos? ¿Qué se nos ocurre si planteamos que un proyecto político popular es una construcción que tendrá la forma, los objetivos y el sentido que el interjuego de los otros actores sociales, económicos y culturales le den en la realidad y no el sentido que nuestras teorías le otorgan?

Entonces, el panorama de lo que ocurre hoy en nuestra América Latina se vuelve otro: ya no nos preguntamos por qué los pueblos votan “contra sí mismos” sino ¿cómo es la construcción política -como construcción social de sentido de la vida- que constituye hoy a los sujetos sociales en las democracias latinoamericanas?

No es la pregunta por el “deber ser” pre definido de las democracias, sino la cuestión sobre el “cómo es” el comportamiento democrático en América Latina. No es la certeza de que los pueblos son democráticos, progresistas e igualitaristas per se, sino la pregunta por cómo son -en la realidad -los comportamientos políticos populares en función de la forma que adquiere la realidad social en cada momento de la historia.

Y allí, en esas preguntas que interpelan no el deber ser sino lo que es, quizás las respuestas nos permitan comprender mejor.

Proponemos analizar el comportamiento electoral de los pueblos en América Latina hoy, como entramado en diferentes procesos que se articulan entre sí y que han ido generando un sujeto popular que está construido en el modo de ser neoliberal, no alienado en un deber ser otro.

En este sentido, proponemos tomar en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Las elecciones argentinas y brasileñas nos ponen sobre la pista de que los sujetos populares no son sólo “homo economicus”.

Hay una larga tradición nacional-popular-democrática que identifica mejoras en la economía y en la distribución del ingreso, con apoyo popular a los procesos políticos. Esta perspectiva, con todas sus variantes y matices, absolutiza la mirada sobre los pueblos latinoamericanos,

profunda y terriblemente empobrecidos y excluidos, como si fueran sensibles solamente a las mejoras de carácter económico.

Habría así, una especie de “racionalidad popular” que debería verse reflejada en el comportamiento electoral, siempre y cuando los gobiernos populares mejoraran los ingresos, los sistemas jubilatorios y de compensaciones económicas para situaciones de pobreza y vulnerabilidad, y las capacidades y posibilidades de consumo.

Pero, vemos aquí que, en los procesos actuales del Cono Sur, la elección popular prescindió de ese supuesto y apoyó a los candidatos del capital.

¿Los motivos son entonces sólo económicos? Evidentemente no.

En la decisión sobre el voto -igual que los sectores medios o las elites- los sectores populares toman en cuenta otros factores : expectativas a futuro, deseos a cumplir, concepciones sobre la seguridad, la equidad, el trabajo. Postular que los sectores populares se “equivocan” cuando no votan a los gobiernos que les mejoran su situación económica es una de las tantas formas de paternalismo y, sobre todo, nos deja en las sombras sobre las razones de su comportamiento político-electoral.

2. La potencia civilizatoria del neoliberalismo.

Desde hace cuatro décadas -desde aquellas dictaduras de la Doctrina de la Seguridad Nacional- los marcos civilizatorios neoliberales no han dejado de expandirse en América Latina.⁸ Inicialmente reservada al pensamiento económico-político de las elites económicas y académicas, la perspectiva neoliberal ha desplazado lentamente a otras miradas en el propio campo popular.

La aceptación de la mercantilización de los bienes y servicios sociales, la universalización de las concepciones meritocráticas sobre el deber ser individual y familiar, han consolidado una cultura masiva de carácter individualista del poseer bienes de consumo grandes o pequeños, pero bienes de consumo al fin que han permeado y constituido un sentido común en amplios sectores populares.

Allí, en esa concepción compartida -por el que tiene una casa en un country o el que posee un par nuevo de zapatillas de marca- radica una de las claves del voto neoliberal-fascista: ¿no será que todos sienten que

8 Emir Sader y Pablo Gentili (comp). "La trama del neoliberalismo." (2003).CL ACSO. Buenos Aires.

tienen “algo que perder” y por lo tanto resultan atractivos los discursos de la “seguridad”?

Preguntados por cuál es su mayor preocupación, los vecinos de vastos sectores de nuestras sociedades responden sin dudar: la inseguridad. Y ese, el de la seguridad es uno de los principales argumentos del neoliberalismo-fascista.

Argentina: la vía democrática hacia el neoliberalismo.

La derecha argentina, consciente de que recurrir a las Fuerzas Armadas y a los golpes brutales típicos de la tradición del siglo XX, no tenía margen en la sociedad en general, se aprestó a dar la batalla para triunfar, por primera vez, en un proceso eleccionario universal, transparente y sin fraude.

A diferencia de las derechas latinoamericanas de Paraguay, Honduras y Brasil y los intentos actuales de la golpista venezolana, en nuestro país, el cambio de signo político se hizo de la mano de una elección limpia .

El gobierno surgido de las urnas considera esa legitimidad de origen y esa legalidad institucional como una muestra clara de su apego “democrático”: el gobierno de derechas confunde (y cada vez más) legitimidad de origen con legitimidad de toda acción de gobierno o sus instituciones afines.

De este modo, cada acción de gobierno o de las instituciones de la república son consideradas democráticas per se, sin analizar o dar lugar al debate sobre su contenido y sentido. El resultado de esta concepción, una democracia “congelada” en su legitimidad de origen, es precisamente la que justifica medidas y acciones de gobierno que son, cada vez más, incompatibles con la vigencia de la democracia. Nos acercamos, aceleradamente, a las situaciones descriptas para el caso colombiano o mexicano.

Los casi cuatro años de gobierno argentino han mostrado una definida política de desconocimiento y negación de los derechos laborales: la muestra explícita es su decisión de no respetar la ley, dejando de convocar paritarias nacionales en gremios claves, docentes por ejemplo.

En los primeros días de su mandato, el gobierno toma la decisión de “disciplinar” la protesta social y elige como caso testigo a las/os líderes de la organización social Túpac Amaru. La detención de Milagro Sala es a todas luces arbitraria e ilegal aunque haya sido hecha por instituciones

de la república.

Este disciplinamiento del derecho a la protesta y el reclamo a las autoridades, se profundiza con las represiones en situaciones como las de Cresta Roja, planta avícola de Tres Arroyos, con más de mil trabajadores cesanteados, y la brutal represión a docentes en plena Plaza de Mayo. En este contexto represivo, la protesta de los pueblos originarios (en este caso mapuches) arrojó la primera desaparición forzada de este período de gobierno: el caso de Santiago Maldonado conmovió al país y demostró la profundidad de las políticas represivas del gobierno neoconservador.

Es determinante la toma inconsulta e indiscriminada de Deuda externa, cifras que auguran crisis y privaciones para las generaciones futuras, y el pago al contado a los especuladores que apostaron contra el propio país (los llamados “Fondos buitres”) en detrimento del uso de esos recursos para áreas como educación, salud o desarrollo productivo.

Finalmente, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poder de la democracia, que acepta la utilización del 2 por 1 en los casos de represores condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que podría liberar anticipadamente a genocidas mundialmente repudiados, -posición que fuera abandonada por la Corte a raíz de las masivas marchas de protesta-, abona y es resultado a la vez de este “clima de época” de retroceso democrático en el país; retroceso que los dichos y acciones xenóforas, machistas y racistas de varios miembros del actual gobierno, profundizan.

En esa puja entre proyectos inclusivos, democráticos y populares versus las derechas promoviendo desde el Estado la reconstrucción de la exclusión neoliberal, se definirá el futuro de nuestro continente latinoamericano.

3. El rol omnipresente de los grandes medios de comunicación monopólicos.

En la actualidad latinoamericana, -y justamente Argentina y Brasil son los dos ejemplos paradigmáticos-, la estrecha vinculación entre el fenomenal despliegue de los medios masivos monopólicos de comunicación y la expansión de la cultura neoliberal es esencial para entender parte del comportamiento electoral.

La concentración de medios es la mayor del planeta y las cadenas de TV,

diarios, radios y redes de internet en manos de uno o dos oligopolios mediáticos, garantizan una uniformidad comunicacional que ya hubieran deseado los totalitarismos fascistas o stalinistas en el siglo XX.

Las referencias mediáticas hacia la política y la corrupción, el Estado y su incapacidad “congénita” para resolver problemas sociales, el mercado y su necesidad de no ser “moleestado” por intervencionismos originados por la política, son “verdades” que no tienen necesidad de ser, siquiera, puestas en duda.

La “oferta” de un modo único de ver lo social -la hegemonía neoliberal- va acompañada por un océano de entretenimiento vacuo que ocupa buena parte del tiempo de quienes estén frente a las múltiples pantallas.

Como hecho cultural reproduce en el entretenimiento los “básicos” de la cultura neoliberal, proponiendo estereotipos misóginos, de objetivación de la mujer, de aprobación de la inequidad y el lujo, de naturalización de las formas que adquiere el modelo societal neocapitalista.

4. Los nuevos espacios oraculares⁹ y la conformación de una subjetividad neoliberal/colonial

La Iglesia Católica, la Escuela Pública, los Sindicatos y los partidos políticos de masas, fueron, durante la segunda mitad del siglo XX, los espacios oraculares de las sociedades latinoamericanas: allí, en esos ámbitos masivos se establecían las orientaciones y los ejes de construcción de una subjetividad colectiva anclada en ideas de comunidad, solidaridad, bien común, equidad, pertenencia nacional.

Hoy, esos espacios oraculares están desdibujados y, en algunos casos reducidos a su mínima expresión, cuando no vacíos de contenidos o con ellos en franca oposición al mundo simbólico neoliberal.

¿Qué decir, qué pensar, cómo actuar? No aparecen vinculados a aquellas instituciones del siglo XX: los nuevos espacios oraculares son los de la imagen televisiva o virtual, la de los medios masivos de comunicación hegemónica, las múltiples expresiones de las iglesias evangélicas de la autoayuda y el neoconservadurismo familiar.

⁹ Rossana Reguillo. *Formas del saber. Narrativas y poderes diferenciales en el paisaje neoliberal* (2007). Buenos Aires. CLACSO.

Consumo, trabajo como obligación, entretenimiento y disciplinamiento evangélico son absolutamente compatibles con una perspectiva masiva en donde la responsabilización sobre lo económico-social está escindido de los componentes de clase de la sociedad: las responsabilidades por la creciente inequidad y pobreza no está en las políticas de los sectores más ricos de la sociedad sino que descansan en las opciones “equivocadas” de los sujetos, individualmente considerados/as.

La contrapartida de este pensamiento centrado en las “faltas”, “culpas” o peor aún “pecados” individuales, es que la solución a las situaciones de privación y vulnerabilidad no surgen, en este paradigma, de una respuesta organizativa de carácter colectivo, sino de una “correctiva” individual.

5. Los efectos de la incertidumbre y la fragmentación social como sistema

Los sujetos individuales y colectivos del neoliberalismo “vivimos en la incertidumbre”. Si bien esta incertidumbre es transversal, en los sujetos populares el impacto es mucho mayor que en los estratos medios.

La expectativa de una vida que transcurría paulatinamente como un camino seguro “de casa al trabajo, del trabajo a casa” ha desaparecido casi completamente: el mundo laboral construido por el neoliberalismo lleva implícitos niveles de precariedad casi infinitos.

La incertidumbre con respecto al presente y al futuro, la inestabilidad económica y laboral, han constituido un sujeto social con estrategias económicas y sociales de corto plazo, tanto en las clases medias como en amplios sectores populares.

Esta incertidumbre económica va acompañada de la fragmentación cultural y social: no hay “un sujeto popular” sino varios, con formas de trabajo y modalidades de supervivencia diferentes, con accesos a la información fragmentarios e intermitentes. Los modos de la vida cotidiana están sujetos a estas incertidumbres, lo que genera dificultades para pensarse y pensar a los/as otros/as en procesos de mediano o largo plazo.

Tener un discurso político que pueda enhebrar todas esas incertidumbres y heterogeneidades es un problema para el campo nacional-popular tanto como para la derecha política. Sin embargo, de la mano de los grandes medios de comunicación oligopólicos, la derecha se ha mostrado más

capaz de articular un discurso que signifique “algo” en un número mayor de sujetos populares.¹⁰

6. El control conservador de instituciones claves de las Repúblicas.

No cabe duda que uno de los poderes claves del Estado republicano, el Poder judicial, ha sido y está siendo utilizado como un arma de carácter político. Nuevamente los casos argentino y brasileño son paradigmáticos: la profusión de causas judiciales, con su correspondiente encarcelamiento, dirigidas sólo hacia los actores políticos de los gobiernos nacional-populares, han servido para construir un imaginario popular en donde corrupción y gobiernos nacional-populares se transforman en sinónimos.

La profusa difusión de las causas judiciales por los medios de comunicación concentrados y la mínima visibilización de las mismas causas cuando se trata de gobiernos neoliberales, han constituido y constituyen las formas más perversas de contribuir a la conformación de un imaginario social sobre los políticos nacional-populares y, por extensión, sobre las políticas nacional-populares que, si bien no se corresponde con la realidad, es percibido como real. Con eso alcanza.

10 García Delgado, Daniel. *El neoliberalismo tardío*. (2017). FLACSO sede Argentina; Buenos Aires.

VI. Estado, democracia y neoliberalismo en América Latina: ¿nuevas simbologías, nuevas identidades?

La naturaleza del neoliberalismo y su relación con el Estado:

hay términos que corren el riesgo de convertirse tanto académicamente como en su acepción cotidiana en “palabras que todo lo explican”. Es lo que ha ocurrido con palabras tales como “populismo”, “desarrollismo”, “socialismo”: terminan requiriendo, para seguir teniendo un carácter explicativo, una definición específica, el sentido que les da quien las está utilizando.

Con el término “neoliberalismo” ocurre lo mismo que con otras palabras macroexplicativas: se aplica a tantos procesos diferentes, que terminamos sin saber muy bien cuándo utilizarlo y si quienes nos leen o escuchan lo interpretan en el mismo sentido que nosotros.

Nos concentraremos por lo tanto, inicialmente, en un intento de definición genealógica del neoliberalismo para comprender sus orígenes y despliegue y definirlo o intentar señalar algunos de sus rasgos claves en la actualidad.

Por una genealogía del neoliberalismo

Imaginemos el mundo de la inmediata segunda Posguerra: en todos los países occidentales, asiáticos y latinoamericanos se ha desplegado un modelo de sociedad que podríamos definir como “estadocéntrico”¹¹ (Cavarozzi, 1991).

Más aún, podríamos afirmar que la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre distintos “modelos” de sociedades estadocéntricas, cuyos grados de involucramiento estatal en la conducción del conjunto social tenían en un extremo -pese a las obvias y claras diferencias ideológicas y de sentido- a las potencias del eje (a Alemania nazi y la Italia fascista) junto al socialismo soviético, y en el otro al Estado benefactor keynesiano con sus modalidades británica, francesa y norteamericana. En América Latina, esta particularidad la expresaban los matices de lo que se ha dado en llamar “gobiernos populistas” -Cárdenas, Vargas y Perón, para mencionar los más reconocidos-¹² (Viguera, 1993).

¹¹ Cavarozzi, Marcelo. *Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina*. (Octubre-diciembre 1991). Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 74.

¹² Viguera. Aníbal. *Populismo y neopopulismo en América Latina*. (Jul-sept.1993). Revista mexicana de Sociología.

En ese contexto mundial de triunfo ideológico-político de las propuestas económicas keynesianas, dos grupos de académicos comenzaron a cuestionar el orden estadocéntrico.

Uno liderado por los austriacos Friedrich August von Hayek y Ludwig von Mises, opositores al nazismo y al comunismo por igual, que desde Viena –¡y ya en las décadas de 1920 y 1930!– señalaban que el Estado ahogaba la iniciativa individual y entorpecía el despliegue del capitalismo. Hayek se exilió en Gran Bretaña y Estados Unidos.

El otro grupo lo lideraba Milton Friedman en la Universidad de Chicago, un economista que consideraba que el eje de la economía debía ser el cuidado de la moneda y no las políticas industrialistas¹³ (Klein, 2016).

Es necesario aclarar, contra la opinión usualmente extendida, que el neoliberalismo no surge como respuesta a las crisis de los años setenta del siglo pasado, sino que “ya estaba ahí”, disponible teóricamente, en las décadas de 1930 y 1940.-

Sin esperanza de ser siquiera escuchados -pues el fin de la Segunda Guerra Mundial significó el auge del capitalismo de Estado y las políticas keynesianas-, los académicos liberales como Hayek y Friedman se encargaron de reunir discípulos, sobre todo en la Universidad de Chicago, y muy especialmente en grupos (Mont Pelerin) y foros (Davos), donde se reunían académicos, empresarios y políticos en este último caso, totalmente marginales en esa época, que tenían chances de ser electos. (Klein, 2016: 85-86).

De modo que, en un mundo donde se desplegaba la “década de oro” del capitalismo keynesiano de posguerra y emergían como nuevas potencias la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, los ultraliberales -que nunca se llamaron a sí mismos “neoliberales”- parecían más un grupo de académicos y empresarios que “atrasaban”.

El primer laboratorio neoliberal

Pasar de la teoría a la acción requería de un escenario que lo permitiera. Durante casi tres décadas, los economistas neoliberales teorizaron, crearon foros y despotricaron contra el Estado omnipresente, pero en 1973 tuvieron su oportunidad.

¹³ Klein, Naomí. *La Doctrina del shock*. (2003).

El dictador chileno Augusto Pinochet creyó necesario transformar drásticamente la matriz de un país que venía de intentar desarrollar el socialismo democrático. Bajo una férrea dictadura -bien lejos de las libertades buscadas en la teoría, con 3.000 desaparecidos, miles de encarcelados, el presidente Salvador Allende asesinado-, los teóricos de la “libertad de mercado” utilizaron la economía chilena como un laboratorio: el primero.

En un país, en donde nadie podía, no ya oponerse sino siquiera discutir, el neoliberalismo completó su primer ciclo de reformas entre 1973 y 1990: privatización de empresas públicas, apertura indiscriminada de la economía, contracción monetaria, desindustrialización no competitiva, reducción de los costos laborales, flexibilización del mercado laboral¹⁴ (Délano y Traslaviña, 1989).

Un componente central para que se consolidara este primer experimento fueron las políticas de apoyo y acompañamiento de los organismos económicos transnacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Banca Occidental favorecieron el despliegue neoliberal con la abundancia de crédito -y su consecuente incremento de deuda, claro-.

Tres enseñanzas clave de este primer ciclo:

- 1.no era imprescindible la democracia para llevar a cabo la reforma neoliberal;
- 2.era necesario comenzar por un shock¹⁵ (Klein, 2016: 115-125), que en el caso chileno era el impacto de la misma dictadura sobre el conjunto de la sociedad, lo que habilitó plantear reformas profundas sin oposición;
3. las políticas de apoyo y acompañamiento de los organismos económicos transnacionales eran esenciales.

Este primer ciclo neoliberal en América Latina tenía, sin embargo, su talón de Aquiles: se había constituido fuera de los marcos democráticos, de la mano de minorías, Fuerzas Armadas y civiles conservadoras, que no respondían a los mandatos de la “soberanía popular”. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y confesionales, en fin, lo que llamaríamos la dimensión política del entramado social y, más importante aún, su dimensión aspiracional e ideal a futuro, seguían descansando en las posibilidades y capacidades de la sociedad civil

14 Delano y Traslaviña. *La herencia de los Chicabo Boys*. (2003). Editorial Ornitorninco. Santiago.

15 Klein, Naomi. *La doctrina del shock* (2008). Editorial Paidós. Buenos Aires.

organizada a partir de la política y confiando en un modelo societal basado en el Estado benefactor como eje.

El decálogo neoliberal en América Latina se entendía entonces como un relato, recitado por políticos de derecha y ultraderecha y particularmente llevado a la práctica por dictaduras militares sin chances electorales.

Segundo ciclo: neoliberalismo y democracia

A mediados de la década del ochenta resultaba evidente que el ciclo de las dictaduras cívico-militares -alimentadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional- en América Latina estaba agotado.

La percepción generalizada era que las dictaduras habían dejado un legado nefasto en materia de derechos humanos, crímenes y corrupción de todo tipo. El mismo diagnóstico corría para definir sus políticas económicas: las transiciones a la democracia y el retorno de lo político como definición de los objetivos comunes de la población retomarían la matriz estadocéntrica, redistributiva e industrialista que habían caracterizado -en el plano de la realidad y en el de lo aspiracional- la segunda posguerra.

La realidad fue muy otra.

Los retornos a la democracia se vieron fuertemente condicionados por las condiciones económicas que dejaron las dictaduras: la dimensión de la deuda externa, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, el debilitamiento del aparato estatal, el monitoreo de los organismos internacionales y sus condicionalidades (Grabendorff, 1997; Cavarozzi, 1991).

A estas situaciones heredadas debemos sumarle el contexto internacional: en el período 1989-1992, lo que parecía imposible ocurrió, y la máxima expresión de una sociedad estadocéntrica -la URSS- implosionó, pasando rápidamente, junto con sus repúblicas satélites, de un Estado que todo lo contenía, al mundo del capital desenfrenado, privatizando todos sus activos estatales.

Nunca podrá enfatizarse lo suficiente este hecho traumático: en apenas tres años, la revolución soviética, que había conducido un país desde la Edad Media al espacio exterior, derrotando en el camino al mejor y mayor ejército de la historia y extendiendo su dominio e influencia a las dos terceras partes del mundo, colapsó. En el imaginario neoliberal, la conclusión era sencilla: el socialismo y toda otra expresión colectiva

en términos sociales y políticos se demostraban en los hechos inviable¹⁶ (Fukuyama, 1992).

Frente a esta nueva realidad, las recuperadas democracias latinoamericanas desplegaron dos alternativas:

El primer ciclo posdictadura -los gobiernos del radical Raúl Alfonsín en Argentina (1983-1989), el aprista Alan García en Perú (1985-1990) e Itamar Franco en Brasil (1992-1994)- intentó retomar la conducción desde el Estado de un proceso de industrialización nacional, renegociación o negación de la deuda externa y programas de reducción de la pobreza. La respuesta del establishment financiero nacional e internacional fue despiadada: crisis hiperinflacionaria, cierre de mercados de deuda y aislamiento económico. Las tibias reformas de estos gobiernos fueron respondidas con la exigencia de un plan neoliberal en toda la línea.

El otro grupo de gobiernos democráticos, reconociendo la imposibilidad de retomar la agenda estadocéntrica, se lanzó a lo que fue un verdadero programa continental de despliegue neoliberal: el Consenso de Washington y los planes de ajuste estructural fueron a fondo, por primera vez, con un rediseño profundo de la matriz societal en democracia (Martínez Rangel y Soto Reyes Garmendia, 2012: 35-64). Este último dato es clave en términos simbólicos e ideológicos: los gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989-1999) y la Alianza en Argentina (1999-2001), Víctor Paz Estenssoro en Bolivia (1985-1989), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-1993), Carlos Salinas de Gortari en México (1988-1994), Fernando Henrique Cardoso en Brasil (1995-2003), por señalar sólo los más significativos, desplegaron el decálogo neoliberal sobre el rol del Estado y el ideario económico y social en democracia.

Las consecuencias de estas políticas han sido profundamente estudiadas: desindustrialización, incremento de la deuda externa, reducción de las capacidades de gestión del Estado, privatización de empresas públicas, desempleo, aumento de la pobreza y la indigencia, y –dato que a veces queda sin analizarse debidamente– fortalecimiento de los grupos nacionales e internacionales del capital concentrado, en especial la articulación del mercado financiero, los organismos internacionales de crédito y los medios masivos de comunicación.

La privatización de la vida societal durante este período no puede dejar

16 Fukuyama. Francis. *El fin de la historia y el último hombre*. (1992).

de ser enfatizada, no sólo en sus aspectos más concretos -por ejemplo, millones de personas y dos generaciones dejaron de tener contacto con el Estado y sus políticas, el desempleo creció y se redujo la planta estatal-, sino en los simbólicos: los medios masivos de comunicación, los nuevos medios virtuales, el alcance de la “aldea global” (McLuhan, 1995), trabajaron profundamente sobre la idea de la valoración negativa del Estado y sus políticas, la perspectiva del esfuerzo individual como medida del éxito, la necesidad de ocuparse y preocuparse por un círculo pequeño de interés -uno y su familia-; dejar de lado los “grandes relatos fracasados y caducos” y sumarse activamente al mundo del consumo -como realidad o como aspiración, todo da lo mismo-.

El “retiro” del Estado tuvo dimensiones enormes e impactos profundos en áreas tradicionalmente cubiertas por él: millones de niñas y niños pasaron a transitar la educación primaria y secundaria en el ámbito privado. La privatización de la educación -o la ampliación de su esfera de intervención- es uno de los efectos de más largo plazo sobre las percepciones en torno a qué tipo de sociedad se quiere constituir.

El otro aspecto central en este período fue el de la reforma de los servicios de salud orientada hacia la monetización y la privatización.

Tampoco es menor considerar el impacto del programa neoliberal continental en las concepciones sobre la relevancia de la vida democrática y el rol de lo político: fueron decisiones tomadas por líderes civiles, en muchos casos provenientes de partidos populares tradicionales, con el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas.

Desde la perspectiva de muchos/as era “legal y legítimo” llevar adelante programas de ajuste. No había dictaduras a las que culpar, y -por qué no pensarlo- si los gobiernos eran electos o reelectos por la voluntad popular no debía estar tan mal lo que llevaban a cabo.

El colapso neoliberal y el breve retorno de las tradiciones nacional-populares

El colapso del modelo de ajuste neoliberal de los noventa en América Latina no provino del juego de las instituciones democráticas.

De hecho, en varios países sus líderes -Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Cardoso en Brasil- no sólo fueron electos, sino reelectos.

Fue la propia inviabilidad económica del modelo la que generó su crisis:

deuda externa impagable, incremento de las tarifas, servicios privatizados que dejaron a millones excluidos, crisis monetaria, colapso financiero.

No fue una transición política hacia un nuevo modelo, sino una serie de estallidos sociales los que cuestionaron a la vez la economía y la política: fueron las movilizaciones las que pusieron en jaque a los propios gobiernos democráticos. Tal el caso del Caracazo en Venezuela (1989) y la emergencia del chavismo (1999), el estallido de 2001 en Argentina y la emergencia del kirchnerismo, la “guerra del agua” en Bolivia (2000) y el surgimiento del MAS, la crisis ecuatoriana y la llegada al poder de Correa (2007), la derrota de la derecha en Nicaragua y el retorno sandinista (2007), la crisis brasileña y el triunfo del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva (2003).

La respuesta popular latinoamericana al ajuste neoliberal en democracia -con todas las gradaciones formales que quisiéramos hacer- dio por resultado un nuevo ciclo de gobiernos con políticas neokeynesianas, intervencionistas y reguladoras que permitieron una rápida recuperación económica, desendeudamiento de las economías y un redireccionamiento de recursos para disminuir sustancialmente los índices de indigencia y pobreza, por primera vez en décadas.

Los alcances concretos de este ciclo “nacional y popular” de la primera década del siglo XXI han sido ampliamente estudiados (Ciappina, 2014; Boron, 2008; Hoyos Vásquez, 2012).

No caben dudas de las enormes mejoras en las condiciones de vida, la infraestructura, la redistribución del ingreso por los cambios en la legislación laboral, la ampliación de derechos sociales y ciudadanos, la búsqueda de una mayor y mejor integración latinoamericana.

Pero el asunto que nos interesa aquí es si los símbolos, valores, ideas y, sobre todo, aspiraciones construidas desde las perspectivas neoliberales desaparecieron del contexto latinoamericano, cuestión que nos parece relevante en tanto encierra las limitaciones que alcanzan a aquellas visiones que entienden la democracia como un proceso sostenido de autogobierno y representación popular cada vez más extendido, en oposición a un modelo económico de sociedad cada vez más excluyente. Esta cuestión se vuelve urgente en torno a las posibilidades actuales de un retorno a la conducción del Estado de los grupos y actores socioeconómicos neoliberales, en una versión corregida y aumentada.

El neoliberalismo del siglo XXI en América Latina.

En perspectiva, la comprensión de lo que hoy es el neoliberalismo en América Latina se alcanza analizando el encadenamiento de los efectos de tres momentos de la historia reciente:

- las dictaduras cívico-militares del período 1970-1980 no lograron consensos políticos ni se continuaron políticamente en un “partido militar”, pero sí profundizaron la represión a tal nivel que los propios sujetos políticos fueron eliminados, exiliados u obligados a la prisión o el exilio interno. Las condiciones para el posterior despliegue neoliberal están implícitas en esa desmovilización forzosa a escala masiva.

- Un aspecto central de las políticas represivas y económicas de las “dictaduras pretorianas”¹⁷ (Rouquié, 1984) fue el control de los medios masivos de comunicación, que se completó con el crecimiento de los monopolios mediáticos¹⁸ (Becerra, 2015). Lenta pero sostenidamente, los principios socioeconómicos defendidos por las dictaduras -anticomunismo, individualismo, liberalización económica y meritocracia- se desplegaron en los medios de la época (Becerra y Mastrini, 2003).

- En estas sociedades reprimidas y desmovilizadas, el primer ciclo democrático posdictadura operó con vehemencia sobre la crítica de carácter político a los gobiernos de facto, pero no desconoció en ninguno de los casos los acuerdos económicos -léase deuda externa ni afectó a los grupos económicos hegemónicos que se enriquecieron y fortalecieron durante los mismos. Esto consolidó la perspectiva de que la economía era una actividad que tenía que ver con leyes de mercado, más allá o más acá de dictaduras o democracias.

El paso para “despolitizar” la economía y entregarla a organismos transnacionales y financistas locales estaba dado: es en los medios masivos de comunicación donde esta paradoja alcanzó su máxima expresión. Cada intento de los gobiernos de las “transiciones democráticas” por recuperar una perspectiva estadocéntrica y de justicia social se topó con la oposición frontal de los medios oligopólicos, que operaron sobre

17 Rouquié, Alain. *El Estado militar en América Latina*. Editorial Siglo XXI. Ediciones varias.

18 Becerra, Martín. *De la concentración a la convergencia: Política de medios en Argentina y América Latina*. (2015). Editorial Paidós, Buenos Aires.

las ideas -ya desplegadas durante las dictaduras- del individualismo, la meritocracia y las incapacidades de gestión del Estado.

Los gobiernos nacional-populares surgidos de las crisis económicas generadas por el propio neoliberalismo lograron recomponer la conducción de la economía por parte del Estado –con matices– renegociando la deuda externa, nacionalizando algunas empresas claves y, sobre todo, desplegando programas educativos, de salud y de carácter compensatorio, buscando reducir los niveles de pobreza e indigencia.

Pero los alcances de la recuperación fueron marcadamente menores en los ámbitos educativos, en los modos de apoyar la organización social a nivel territorial, y en el acceso a los medios masivos de comunicación.

Para principios del siglo XXI, el proceso de concentración mediática en América Latina había alcanzado un nivel inédito a escala mundial (Becerra y Mastrini, 2017). Las TIC (tecnologías de información y comunicación) concentraron aún más el uso de la palabra y la construcción de sentido de carácter neoliberal.

El proceso de conformación de un “sujeto neoliberal” ,en poblaciones antes movilizadas por la lógica de la justicia social, la equidad económica y el sentido de pertenencia a una comunidad, alcanzó niveles masivos.

Estaban dadas las condiciones para que las derechas neoliberales alcanzaran o intentaran alcanzar el poder político por la vía democrática

Los alcances del neoliberalismo en América Latina.

El neoliberalismo se re-despliega en una “etapa superior” para la realidad latinoamericana. A escala global también ocupa la casi totalidad de las economías capitalistas, en un nuevo salto de amplitud y profundidad creciente. Sus efectos, aún con los quince años de recuperación nacional-popular de principios de siglo en América Latina, no pueden ser minimizados.

Las sociedades latinoamericanas –desiguales de por sí, en su matriz societal colonial y postindependencia– son hoy más desiguales, tienen una mayor concentración de la riqueza que en las décadas del setenta y ochenta.

Los estratos medios, lejos de liderar un proceso de democratización, están sujetos a la lógica de la económica neoliberal: trabajar más horas por menor paga, con sistemas jubilatorios de menor cobertura y situaciones

de inseguridad mayores.

El mundo laboral se halla hoy escindido en dos grandes realidades: un sector integrado al sistema productivo “tradicional”, con salarios a la baja y peores condiciones laborales, y un sector informal y/o excluido, con condiciones laborales estacionales y precarias o directamente sin trabajo.

Las sociedades latinoamericanas se encuentran hoy sujetas a la comercialización insensible de cosas, actividades y situaciones que han sido incluidas en la lógica del mercado: los sistemas de educación y salud privatizados en su mayoría, los bienes naturales también privatizados y monetarizados, excluidos del control democrático, y la infraestructura social mercantilizada.

Uno de los rasgos más novedosos del neoliberalismo actual en América Latina es la creciente colusión entre el capital corporativo y financiero y el Estado.

Autores como Sheldon Wolin¹⁹ (2008) utilizan la definición “Democracia S. A.” para describir este proceso de desdibujamiento profundo de las esferas estatal y empresarial.

En casos como el de Argentina, se han alcanzado niveles inéditos de colonización de la gestión estatal por representantes del capital concentrado -empresarial, comunicacional y financiero-. Las consecuencias no pueden ser más delicadas: la eliminación de la mediación “política” del mercado por parte del Estado.

Las economías latinoamericanas -de por sí inestables e históricamente sujetas a las distorsiones que los procesos dependencistas generan- se ven hoy afectadas por procesos de “desestabilización permanente”, modalidad inherente al capital financiero especulativo, que circula a escala global y que ingresa y sale buscando rentabilidades rápidas²⁰ (Allami y Cibils, 2017).

Las dimensiones simbólicas de la construcción neoliberal del siglo XXI

El neoliberalismo es debatido y confrontado como una teoría económica,

19 Wolin, Sheldon. *Democracia S.A.* (2009). Katz, Buenos Aires.

20 Allai, Cecilia y Cibils, Alan. *Financiarización en la periferia latinoamericana: Deuda, commodities y acumulación de reservas.* (Mayo-septiembre 2017). FLACSO. Revista Estado y Políticas Públicas N° 8. ISSN 2310-550X pp. 81-101

cuando en realidad debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio.

La expresión más potente de la eficacia del pensamiento científico moderno es la naturalización de las relaciones sociales, concepción según la cual nos encontramos hoy en un punto de llegada, sociedad sin ideologías, modelo civilizatorio único, globalizado, universal, que hace innecesaria la política.

El neoliberalismo es un excepcional extracto, purificado y por ello despojado de tensiones y contradicciones, de tendencias y opciones civilizatorias que tienen una larga historia en la sociedad occidental, constituido como el sentido común de la sociedad moderna.²¹ (Lander, 2000).

Este proceso de naturalización no se circunscribió a los estudios académicos hegemónicos, sino que abarcó a sectores cada vez más amplios de la población, incluyendo a los populares. La cuestión es cómo se llega a esta naturalización.

En oposición al neoliberalismo como un conjunto de políticas estatales, una fase del capitalismo o una ideología que libera al mercado con el fin de restaurar rentabilidad para la clase capitalista, me uno a Michel Foucault y a otros, en una concepción del neoliberalismo como un orden de razón normativa que, cuando está en auge, toma la forma de una racionalidad rectora que extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la economía a cada dimensión de la vida humana.²² (Brown, 2018: 35).

Nos sumergimos entonces en un terreno más difuso pero muy importante para comprender la expansión neoliberal en el siglo XXI latinoamericano: la construcción de un “sujeto neoliberal” -individual y, por sumatoria, colectivo- que vive todos los aspectos de la realidad en la modalidad de la racionalidad neoliberal²³ (Alemán, 2016); Esta perspectiva configura un actor que aplica la lógica mercantil “desde los sujetos” a la educación, la salud, el cuidado del cuerpo, la vida familiar y la vida barrial.²⁴ (Merlín, 2017).

21 Lander, Edgardo. *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (2001) CLACSO.

22 Brown, Wendy. *El pueblo sin atributos*. (2016). Editorial Malpaso, México.

23 Alemán, Jorge. *Horizontes neoliberales en la subjetividad* (2016). Grama ediciones, Barcelona.

24 Merlín, Nora. *La colonización de la subjetividad*. (2017). Editorial Letra Viva, Buenos Aires.

“En comparación con el liberalismo económico clásico, somos homo economicus –y solo homo economicus– en todas partes. Esta es una de las novedades que introduce el neoliberalismo en el pensamiento político y social y se encuentra entre sus elementos más subversivos. Adam Smith, Nassau Senior [...] David Ricardo [...] pusieron mucha atención en el vínculo entre la vida económica y política sin reducir la segunda a la primera, ni imaginar que la economía podía rehacer otros campos de la existencia en sus términos y mediciones, y a través de ellos”. (Brown, 2018: 40)

En consecuencia, hay un profundo proceso de traslación desde el homo politicus, en el que las definiciones y decisiones individuales y colectivas estaban sujetas a racionalidades diversas –religiosas, culturales, axiológicas, tradicionales–, hacia un homo economicus, en el que la única racionalidad posible es la del “capital humano”.

Todos los aspectos de la vida quedan sujetos a esta lógica, donde lo que importa es cómo mejorar -y justificar- el valor presente y futuro de las actividades individuales y colectivas.

“La búsqueda de educación, entretenimiento, ocio, reproducción, consumo y demás elementos se configura cada vez más como decisiones y prácticas estratégicas relacionadas con mejorar el valor futuro de uno mismo”. (Brown, 2018: 112).

¿Hay una dimensión simbólica del Estado?

Está bastante establecido que el Estado posee varias dimensiones, una de las cuales es la simbólica. La cuestión está presente en forma más o menos tácita en la caracterización weberiana, y en forma explícita en la perspectiva marxista, en particular en la gramsciana (1980) o los aportes de autores como Foucault (2007).

En América Latina, Oszlak (1997), O'Donnell (1978) y más recientemente García Linera (2009) han hecho contribuciones significativas.

Nosotros proponemos aquí una conceptualización en la que los símbolos son, claramente, una representación que genera identidad. La identidad es generadora de pertenencia, de sentirse parte, miembro. En ese sentido, es una percepción que genera confianza.

Podríamos preguntarnos qué es lo que hace que cada día, por ejemplo, millones de familias le confíen sus hijos a la maestra o a la escuela, por qué las personas le atribuyen valor al papel moneda, cuándo pierden esa confianza.

En el Estado, la cuestión identitaria resulta clave en varios niveles:

- la forma en que se dispone de los bienes y servicios -la percepción de los usuarios, destinatarios y/o beneficiarios-;
- el rol de los/as trabajadores/as estatales.

La dimensión simbólica en relación con las representaciones sobre el Estado ha sido descuidada por aquellos espacios políticos y/o gobiernos que, paradójicamente, hacen de la defensa de lo estatal el eje de sus objetivos de gobierno para el logro de su ideal de sociedad, en el caso latinoamericano, las experiencias nacional-populares.

Como contrapartida, la cuestión ha sido una preocupación central en las organizaciones no gubernamentales, empresariales, centros de estudio, think tanks y gobiernos que proponen el achicamiento del Estado y/o su desestructuración: en el caso latinoamericano, las perspectivas neoliberales.

Las representaciones.

Un aspecto central de las representaciones sociales del Estado está basado en los elementos identitarios que las sociedades construyen. Al mismo tiempo, la concepción del Estado es también una construcción social, y como tal está sujeta a la disputa entre actores, grupos, partidos y espacios de saberes, incluyendo cada vez más a los medios masivos de comunicación-.

En la base de las representaciones sociales y los elementos identitarios se hallan las matrices sociales y culturales desarrolladas a partir de paradigmas o modos de entender la realidad como un todo (Argumedo, 2004).

La identidad en relación con el Estado se constituye como un esquema de representaciones compartidas y, por lo tanto, de sentimientos de pertenencia a un colectivo, con un carácter intersubjetivo y relacional.

Estas identidades refieren a una concepción social y política que tiene además implicancias a futuro, en la idea de una comunidad imaginada.

La construcción de un relato identitario colectivo resulta así central,

porque las representaciones compartidas promueven una lealtad común y regulaciones de tipo político-moral sobre eso que llamamos Estado.

También la construcción de una memoria del Estado y sobre el Estado.

Por eso resulta importante analizar los mecanismos de construcción de identidad sobre el Estado y su rol a través de diferentes dispositivos, instituciones estatales, culturales, mediáticas. Estudiar la generación de símbolos y representaciones sociales específicos y distintivos que se vuelven reconocidos y legitimados.

Estas representaciones simbólicas no permanecen en el campo de las “ideas” o “sentimientos”, sino que en forma permanente ayudan a delimitar lo que tanto los gobiernos como las sociedades aceptan como dimensión, densidad y modalidad del Estado y de las políticas públicas.

Las representaciones colectivas sobre el Estado nacional-popular en América Latina.

Partiendo de las perspectivas explicitadas, podríamos establecer algunas dimensiones de las representaciones y los símbolos sobre los que se basan las identidades comunes en relación con el Estado.

En primera instancia, el paradigma de la igualdad, basado en las perspectivas republicanas que surgieron con la Independencia misma. En la idea de “república” latinoamericana estuvo presente -quizás más de lo que las propias élites criollas hubieran deseado- la aspiración a la igualdad. Era imposible enfrentar las fuerzas de un orden colonial construido sobre un Estado que garantizaba la desigualdad social y política sin poner la cuestión en primer plano. Aún relegada a su mínima expresión, la igualdad ante la ley representó durante dos siglos uno de los aspectos centrales en la legitimación social del Estado latinoamericano y su rol, en particular desde la perspectiva de los sectores populares. Para las élites, sin embargo, el eje simbólico era el orden y el progreso (Oszlak, 1997: 86-169).

A la igualdad estaba asociada la búsqueda de la equidad, aspiración de los sectores populares mucho más que de las élites, puesto que operaba sobre las desigualdades socioeconómicas, por lo que la “república” de las clases privilegiadas estaba en “peligro”.

La equidad como representación colectiva tomará impulso y formato

estatal con la Revolución mexicana, y a partir de la década de 1930, con los gobiernos nacional-populares -“populismo”, en la jerga académica liberal-, que hicieron de la justicia social -correlato de la equidad- el eje central de su fundamento de legitimidad.

El Estado nacional-popular se sostuvo por sus políticas específicas y también, en buena medida, por lograr consolidar una simbología sobre su rol como garante de la equidad (Viguera, 1993; Trías, 1978), percepción que se profundizó con las experiencias socialistas de la segunda posguerra en América Latina, alcanzando en Cuba y Chile sus expresiones de mayor densidad.

A partir del despliegue de este tipo de gobiernos, la acción del Estado fue vista por los sectores populares como redistribuidora de riqueza, por la vía impositiva, frente a una sociedad desigual donde los ricos poseían lo que no les correspondía.

Las sociedades no eran desiguales porque sí, sino por el rol estatal y su control por parte de las élites.

Como resultado de esta construcción inicial basada en la dupla igualdad-equidad, hay una construcción simbólica que considera la desigualdad social -y muy particularmente la económica- como inaceptable, por ende, el Estado que no operara sobre esa situación era considerado fallido.

Otro aspecto clave de la percepción latinoamericana sobre el Estado fue la construcción social de la pertenencia a una nación.

Largamente analizada en forma crítica por el marxismo y el liberalismo, esta idea se constituyó en una de las construcciones sociales más potentes de los gobiernos nacional-populares. “Lo nacional” se anclaba en los símbolos tradicionales de las patrias constituidas en la post-independencia: la bandera, los escudos, los himnos, las escarapelas, pero de ninguna manera se quedaba allí. Esa era la referencia básica sobre la que se asentaba una idea más poderosa: había bienes materiales, recursos públicos y actividades que debían estar en manos del Estado por ser vitales para la nación como tal.

Esta perspectiva de un recorte -o varios- de actividades que debían imperativamente formar parte de la agenda del Estado nacional sostuvo y habilitó todo el proceso de creación de empresas públicas y nacionalización de compañías extranjeras. Estado, nación y pueblo constituyeron una representación de enorme potencia transformadora.

Vinculada a esta tríada está la concepción que le atribuía a las élites un carácter antinacional y a las burguesías una incapacidad constitutiva -por débiles o extranjerizadoras- para hacerse cargo de la gestión y desarrollo de empresas, industrias y aún del mismo Estado.

El correlato institucional de estas construcciones simbólicas “por la positiva” de las posibilidades, capacidades y rasgos del Estado fue el despliegue de la institucionalidad estatal -incluyendo la gestión- a sectores cada vez más amplios de la vida social y económica: de las tradicionales funciones vinculadas a la policía, la justicia y la defensa nacional, el Estado nacional-popular pasó a ocuparse de la educación, la salud, las políticas sociales, las pensiones, el derecho de trabajo, la planificación económica, las empresas productoras de bienes y servicios, la infraestructura, la política científico-tecnológica. En fin, Estado y nación se confundieron uno con la otra y el accionar de las instituciones estatales reafirmó el apoyo social -en particular de los sectores populares-.

La cuestión de las “capacidades del Estado” para llevar a cabo estas políticas estaba fuera de discusión.

En la construcción simbólica que se desplegó y fortaleció durante los gobiernos nacional-populares, se formaron a cientos de miles de trabajadores/as en los más diversos campos de gestión empresarial, administración y provisión de servicios sociales. El Estado y sus trabajadores/as, considerados/as “servidores/as públicos/as” y valorados/as por su contribución a la nación, estaban a la altura de las tareas a emprender. El “empleo público” era, además, una figura aspiracional de enorme atractivo para los propios sectores populares, pues implicaba contribuir a la nación, al bienestar general, y realizar tareas consideradas socialmente valiosas.

En esta construcción simbólica están ausentes las consideraciones en torno al “costo”: el Estado como garante de la equidad, la igualdad y la consolidación de una nacionalidad inclusiva no está cuestionado en relación con la utilización de los recursos públicos. La cuestión del “costo” fue inicialmente una construcción simbólica de las élites, no porque impactara directamente sobre sus propias modalidades de acumulación de capital, sino porque era un argumento a utilizar frente a lo que veían como una amenaza: el trastocamiento del orden liberal tradicional por la acción económica, social y cultural de un Estado denso, extendido y con soporte popular.

Las instituciones y las construcciones simbólicas sobre el Estado.

La institución clave en la construcción del rol positivo del Estado fue la escuela.

El sistema público de educación -en especial la escuela primaria- consolidó la simbología estatal postindependentista -las banderas, los próceres y también la aspiración a la igualdad republicana-, a la que le sumó la simbología típica de los gobiernos nacional-populares: el vínculo entre Estado y nación, la búsqueda de la equidad, el culto al trabajo, el respeto por los empleados públicos. La educación superior universitaria, aún en su composición tradicionalmente elitista, contribuía a las representaciones simbólicas “por la positiva” del Estado, aunque más no fuera por la promoción de titulados que luego se harían cargo de la conducción política -en su versión elitista oligárquica-.

También contribuyeron las empresas estatales desde una doble perspectiva: su contribución a la nación y las capacidades desarrolladas por sus trabajadores/as.

Y los partidos políticos, como organizaciones de representación que buscaban precisamente acceder al gobierno.

Las preocupaciones de la época no giraban en torno a la “corrupción” o las capacidades de gestión de quienes provenían del campo de la política, sino en torno a la pertenencia ideológica del funcionario público -su procedencia partidaria, sus ideas populares o antipopulares, etcétera-. Desde las organizaciones políticas, el Estado contribuía así a la ampliación y consolidación de la democracia como “cosa pública”.

El rol de los sindicatos también fue clave en la consolidación de una perspectiva simbólica a favor del Estado, como árbitro y espacio de lucha/diálogo/consenso/desacuerdo entre sindicatos y patronales, y por el rol que los propios trabajadores estatales sindicalizados jugaban en la gestión estatal y sus alcances.

Las representaciones del neoliberalismo a inicios del siglo XXI.

Podemos esbozar, finalmente, los modos en que el neoliberalismo ha venido transformado y poniendo en jaque discursivo las construcciones simbólicas “tradicionales” -nacional-populares- sobre el Estado.

Allí radica una de las facetas principales en torno a las posibilidades de consolidación neoliberal en la América Latina del siglo XXI: crear nuevos marcos identitarios en relación con el “deber ser” del Estado y el tipo de sociedad que imaginamos.

Los aparatos de representación que el neoliberalismo utiliza en el despliegue de su perspectiva del “capital humano” son hoy diversos en términos de dispositivos, aunque muy homogéneos en sus definiciones sobre el Estado. En todos los casos, el efecto buscado o alcanzado -voluntariamente o no- es el de desdibujar las identidades “por la positiva” y promover una sistemática visión negativa acerca de la gestión estatal.

Un rol central en esta nueva “construcción de sentido” (Saintout, 1998, 2012) lo juegan, quizás como nunca antes, los medios masivos de comunicación, que son hoy en América Latina grandes oligopolios mediáticos-empresariales cuyos intereses y perspectivas están en colisión con cualquier tipo de construcción sociopolítica que plantee algún tipo de control estatal de las variables financiero-empresariales (Galvis Ortiz y Botero Montoya, 2009).

En este sentido, es prácticamente imposible encontrar en la actualidad -en las diversas modalidades radiales, visuales, gráficas y virtuales que han adquirido los medios masivos de comunicación hegemónicos- alguna perspectiva que no remita a una definición por la negativa sobre el rol estatal en la vida social, independientemente incluso de las inclinaciones políticas a derecha o izquierda.

La cobertura circula siempre sobre un camino trillado pero efectivo: la gestión estatal es incapaz de resolver las necesidades para las que fue creada; los/as trabajadores/as estatales son un obstáculo para el logro de los objetivos que el propio Estado tiene, debido a su sindicalización y derechos “excesivos”; la clase política es -como un todo- incapaz de hacerse cargo “seriamente” de la gestión estatal por dos motivos recurrentes que se muestran como inevitables e irreparables: demagogia y corrupción: el Estado es un espacio de “despilfarro” de los impuestos que la ciudadanía paga.

Las consecuencias de este relato son parte del “sentido común” que constituye el nuevo sujeto neoliberal: mayores impuestos -o sea, más recursos para el Estado- son una carga que la sociedad en su conjunto soporta para obtener cada vez menos servicios; los servicios que puedan obtenerse por una vía que no sea estatal serán de mejor calidad -esto

incluye áreas como infraestructura, salud, educación, pero también jubilaciones y seguridad-; la reducción de los planteles de trabajadores/as públicos/as es una medida siempre valiosa, pues resulta claro que las plantas de personal están abultadas por la discrecionalidad política; el salario que los/as trabajadores/as cobran -independientemente de si es exiguo o no- es siempre excesivo y no guarda relación con el esfuerzo que deben hacer quienes están “fuera” del Estado.

Como en un espejo inverso, la gestión del mercado es siempre referenciada como exitosa, sujeta al principio sacrosanto de la rentabilidad, marcada por el cuidado en el uso de los recursos y alejada de la “corrupción política”, como si los universos del mercado y el Estado fueran órbitas totalmente escindidas sin puntos de contacto.

En los ámbitos educativos -educación primaria, secundaria y universitaria- las referencias que podían generar una construcción de sentido positiva del Estado están también en crisis.

La educación primaria y secundaria, tradicionalmente de carácter público, se ha ido deslizado hacia la gestión privada, lo que aleja la idea del valor de lo público en materia de saberes. Y, aún en los ámbitos estatales, la simbología -la construcción de sentido empática con el Estado- ha quedado referenciada a los “símbolos patrios”, lejos de un trabajo consistente y curricular sobre la relevancia de lo público para el conjunto de la sociedad.

Las universidades han sufrido un doble proceso de debilitamiento, por la proliferación de universidades de gestión privada y por la emergencia de centros, institutos y facultades de gestión pública que han sido cooptados por la lógica empresarial y/o neoliberal, lo que genera promociones enteras de egresados listos para ponerse a “reducir” las dimensiones “malignas” del Estado. Las modalidades de gestión y de evaluación del propio funcionamiento de un número creciente de universidades han quedado atrapadas en la lógica del “capital humano”.

Los propios trabajadores estatales y sus organizaciones sindicales han visto disminuidos sus márgenes de maniobra por las restricciones presupuestarias y salariales y la reducción de la esfera de influencia de su tarea sobre el conjunto de la sociedad. Lo que era visto como un aspecto aspiracional positivo -trabajar en el Estado- es hoy una tarea “poco exitosa”, aún si la alternativa es no tener inserción laboral estable de ningún tipo.

Tampoco es desdeñable el impacto que tienen en las representaciones colectivas las condiciones en las que décadas de desfinanciamiento y reducción presupuestaria estatal han dejado a las instituciones que están “en contacto” con los sectores populares: el deterioro edilicio y presupuestario de escuelas, hospitales, ministerios, hogares, comedores, banca pública, rutas nacionales, etcétera, no es visto –ni señalado por los medios– como resultado de políticas específicas de desfinanciamiento, sino como consecuencia de la gestión estatal “per se”.

En muchos lugares de América Latina, el único contacto que los sectores populares tienen con el Estado es por medio de las fuerzas represivas.

La construcción popular de una identidad negativa sobre el Estado.

“Es necesario un esfuerzo de deconstrucción del carácter universal y natural de la sociedad capitalista-liberal. Cuestionar las pretensiones de objetividad y neutralidad de los principales instrumentos de naturalización y legitimación de este orden social: las ciencias sociales. La primera dimensión se refiere a las sucesivas separaciones o particiones del mundo de lo “real” que se dan históricamente en la sociedad occidental.” (Lander, 2000)

Nos hallamos rumbo a la tercera década del siglo XXI, luego de quince años de gobiernos de carácter mayoritariamente nacional-popular en América Latina, y, sin embargo, el sentido del Estado y su rol está fuertemente teñido de una perspectiva neoliberal. Lo que está en juego es, junto con el Estado, el carácter y sentido mismo de nuestras sociedades.

El “sentido común” sobre conceptos tales como igualdad, equidad, justicia social y democracia, ha sido modificado. La igualdad no se percibe como resultado de la acción del Estado en un orden republicano, sino como igualdad de acceso al mercado. Precisamente lo que era visto como un ámbito de generación de desigualdad ha pasado a ser mostrado y percibido como el espacio donde la igualdad es alcanzada y adquiere sentido.

La idea de equidad también ha sido desprendida de la acción del Estado: más aún, el accionar del Estado cuando interviene en la determinación de los impuestos de carácter progresivo o en el incremento de los presupuestos destinados a ampliar su esfera de influencia, es señalado paradójicamente como generador de inequidades.

La justicia social ya no es la reparación por medio de políticas públicas de las desigualdades que genera el mercado: el Estado atenta contra la equidad y la igualdad, pues “distorsiona” el campo de la economía y su accionar virtuoso.

Los bienes y servicios públicos, en lugar de ser visualizados como derechos, son señalados como generadores de inequidades y desajustes económicos porque des-mercantilizan lo que debe ser abonado.

Así, toda política niveladora y compensatoria, todo programa social y educativo, los subsidios a las tarifas o bienes de consumo, son juzgados como una acción “inequitativa”.

El cuestionamiento a lo público se ha iniciado en relación con las actividades y el rol del Estado, pero a medida que avanza, pone en discusión la democracia tal cual la concebimos.

Todos sabemos que ésta tiene tantas variantes –social, liberal, radical, republicana, representativa, autoritaria, directa, participativa, deliberativa, plebiscitaria– como significados y sobre todo como prácticas que le dan los pueblos y los gobiernos.

En todos los casos se basa en un principio nodal: las sociedades se ven a sí mismas como un colectivo donde las definiciones de sentido están sujetas a variables de carácter político, social, religioso, cultural, artístico, valorativo y económico. Con esto queremos decir que las democracias no sólo deben tender a ampliar los espacios ciudadanos de toma de decisiones, sino también a que esas decisiones tomen en cuenta variables diversas.

Es precisamente en ese punto donde el neoliberalismo amenaza a la democracia: la construcción de sentido neoliberal subsume todas las decisiones a la lógica del “capital humano”. No hay definiciones atravesadas por cuestiones tales como los derechos, las necesidades, las valoraciones, las tradiciones, en la totalidad de la diversidad societal: el homo economicus sustituye al sujeto político. De triunfar esta perspectiva, los ámbitos y modelos de toma de decisiones en relación con el Estado y la sociedad se reducen sensiblemente: la viabilidad económica y la rentabilidad son la única norma a tener en cuenta.

VII. Posverdad, falsas noticias y guerra jurídica: el adelgazamiento de la democracia en América Latina.

A principios del siglo XXI la realidad político-social de América Latina podía catalogarse como excepcional: luego de dos décadas de dictaduras militares (1960-70); la década perdida (1980) y la década neoliberal (1990-2000); se produjo el alineamiento de movimientos sociales resistentes al neoliberalismo y partidos políticos populares que, junto a la emergencia de liderazgos individuales de carácter excepcional, conformaron un conjunto de gobiernos de políticas nacionalistas, populares y democráticas.

Si nos ubicamos en la primera década del siglo XX -digamos en el año 2010- nos encontraremos con una situación única en la historia latinoamericana: la coexistencia de gobiernos con orientaciones económico-sociales similares en América del Sur y Central.

En **Venezuela** el gobierno de Hugo Chávez Frías iniciado en 1998 continuaba en el poder en el 2010; en la **Argentina**, a la presidencia de Néstor Kirchner le sucedía la de su esposa Cristina Fernández de Kirchner, dándole continuidad a un proceso político que incorporaba tradiciones peronistas con movimientos sociales y de Derechos Humanos; en **Brasil** gobernaba Lula Da Silva y lograba entregar el poder a Dilma Rousseff, donde el Partido Trabalhista gobernaba en articulación con los grandes sindicatos paulistas y los movimientos sociales como los Sin Tierras. En **Bolivia**, Evo Morales -asumido en el año 2006- se consolidaba como el presidente del MAS, un movimiento que articulaba viejos partidos de izquierdas junto a sindicatos nuevos -como el de cocaleros- y movimientos indigenistas. En **Uruguay**, el Frente Amplio (un conjunto de partidos y sindicatos de orientación de izquierdas) triunfa en el año 2005 -con Tabaré Vázquez- y logra continuar con su sucesión en el año 2009 cuando triunfa José “Pepe” Mujica. En agosto del año 2008, por primera vez en la historia del Paraguay, triunfa un partido que no es el tradicional Partido Colorado: la Alianza Patriótica para el Cambio (que reunía a partidos socialistas, socialdemócratas y demócratas cristianos), llevando a la presidencia al obispo Fernando Lugo. En el **Ecuador**, la Alianza País -fundada por Rafael Correa- se constituye con la concurrencia del Partido Comunista, la izquierda democrática, el movimiento Pachakutik y el partido Roldosista ecuatoriano entre otros.

Correa es electo presidente en el año 2007. En **Chile**, desde el año 2006 gobernaba el Partido Socialista con Michel Bachelet como presidenta. En el año 2007, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de **Nicaragua** volvía al poder –luego de 17 años- con la presidencia de Daniel Ortega. En el año 2006, Manuel Zelaya triunfaba en **Honduras** con el Partido Liberal (socialdemócrata). **Cuba** continuaba su tradicional política de corte socialista y antiimperialista.²⁵

Este ciclo de confluencia de gobiernos nacional-populares en América Latina, generó además un conjunto de iniciativas de integración que pusieron en discusión la tradicional injerencia indebida de la política exterior norteamericana y de los Organismos Internacionales en la región: fue paradigmática en este sentido la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en el año 2005, en donde el presidente norteamericano George Bush esperaba la aprobación del ALCA (la integración de toda América bajo el paraguas norteamericano) y se retiró con la derrota y postergación de su proyecto; hecho nunca antes vivido en la historia latinoamericana. También fueron relevantes la creación del ALBA-TPL, la UNASUR y la profundización del MERCOSUR y la CELAC.²⁶

Las derechas latinoamericanas se vieron, por primera vez en décadas, sin posibilidades de quitar del poder a estos gobiernos nacional-populares por medio del clásico golpe de Estado.

En la experiencia política del siglo XX, las derechas latinoamericanas (y las grandes empresas transnacionales asociadas a las mismas) daban la lucha contra la emergencia de gobiernos nacional-populares apelando en última instancia a las Fuerzas Armadas y en algunos de los casos vinculados a Centroamérica y el Caribe como áreas de influencia exclusiva de los EEUU a la intervención militar externa.

De este modo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se desplegaron las llamadas Dictaduras de la Seguridad Nacional a lo largo de toda América Latina: En el año 1954 un golpe militar destituyó al gobierno popular de Jacobo Arbenz en **Guatemala**; en 1964 el General Castelo Branco

25 Soledad Stoessel, *Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI.*, Polis [En línea], 39 | 2014, Publicado el 22 enero 2015, consultado el 08 junio 2019. URL : <http://journals.openedition.org/polis/10453>.

26 Sader, Emir. *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina.* (2006). Buenos Aires. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

destituyó con un golpe de Estado al presidente democrático Joao Goulart inaugurando una dictadura de 21 años (hasta 1985); en el **Uruguay**, en 1973, el presidente Bordaberry habilitó el inicio de la Dictadura uruguaya entregándole el poder a las Fuerzas Armadas (dictadura que duraría hasta 1985); en setiembre de 1973 el General Augusto Pinochet iniciaba la feroz dictadura chilena derrocando al presidente Salvador Allende (dictadura que duraría hasta 1990). En marzo de 1976 una Junta Militar iniciaba la dictadura genocida en la **Argentina**, dictadura que finalizaría en 1983. En **Bolivia**, las dictaduras militares se sucederían entre 1964 y 1982.²⁷

Estas dictaduras de la Seguridad Nacional, bajo el paraguas ideológico de la lucha contra “el comunismo” o la “subversión” desencadenaron procesos de represión que llegaron hasta la figura del genocidio. La planificación del terror escondía un propósito de largo plazo: reconfigurar las sociedades latinoamericanas para reinstalar a las elites económicas en el poder.

Así, los procesos democráticos se veían interrumpidos por las Fuerzas Armadas y de este modo la asociación entre derechas civiles y Fuerzas Armadas quedaba al descubierto.

El cambio de estrategias de las derechas latinoamericanas: guerra jurídica, posverdad y noticias falsas, instrumentos de la recomposición elitista.

La Guerra Jurídica como concepto y como práctica.

En el año 2001, el general norteamericano Charles Dunlap Jr. acuñó el término lawfare (en castellano “Guerra Jurídica”)²⁸ para señalar los efectos que podía tener utilizar sistema judicial como arma de guerra: según este general, las fuerzas militares y/o “terroristas” más débiles que se oponían a las fuerzas superiores de los EEUU “utilizaban” las leyes del Derecho Internacional y las propias de los EEUU para “atacar” las estrategias militares norteamericanas.

¿Ejemplos? El general señalaba el “daño” cometido a la estrategia de

27 *La Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad Nacional*. Atlas histórico de América Latina y el Caribe. <http://atlaslatinoamericano.unla.edu.ar/assets/pdf/tomo2/cap2.pdf>

28 Dunlap, Charles. *Introducción a la guerra jurídica Manual básico* (2017). Military Review. Fuerza Aerea de EUA. www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/Online-Exclusives/Dunlap-Introduccion-a-la-guerra-juridica.pdf

ocupación militar de Irak por las fotos y filtraciones sobre las vejaciones cometidas por las fuerzas norteamericanas a los prisioneros en la cárcel de Abu Graieb. También la repercusión que había tenido la divulgación de los bombardeos a barrios civiles en la invasión a Afganistán, lo que había retrasado el avance de las tropas norteamericanas por el impacto de aquellas bombas sobre la población civil en la opinión pública norteamericana.

Había, según el general, usos “positivos” de la Guerra Jurídica: ejemplo de ello había sido el “exitoso” proceso de sanciones económicas y militares, por la vía legal, que los Estados Unidos habían impuesto a Irak bajo las acusaciones de que ese país estaba violando el derecho internacional y poseía armas de destrucción masiva: cuando finalmente se produjo la invasión norteamericana a Irak, el 60% de los aviones de guerra irakíes no podían volar por falta de repuestos: la Guerra Jurídica había logrado el mismo objetivo que las bombas: sin disparar un tiro, la mayoría de la fuerza aérea enemiga estaba sin poder ser utilizada. Nunca se descubrieron las armas de destrucción masiva.

Tanto en la modalidad de defensa de fuerzas militares en inferioridad de condiciones, como de ataque de fuerzas superiores, la “batalla jurídica”, que hace hincapié en las violaciones de enemigos y adversarios a los principios y las leyes, cobra hoy, en los conflictos armados, una relevancia que antes no tenía, además de reducir costos militares y pérdidas de vidas humanas.

Esta alternativa -la de guerra jurídica- fue adoptada en América Latina no como arma de política internacional sino como arma de lucha política interna: los gobiernos y líderes populares podían y debían ser hostigados jurídicamente en forma permanente cuando estuvieran en el ejercicio del poder y más aún una vez dejado el mismo.

En este sentido, hay un cambio de perspectiva que significó que se iniciaran acciones legales a repetición por parte del Poder judicial, en una seguidilla de causas que afectarían a los principales líderes latinoamericanos.

En todos los casos, las acciones jurídicas buscaron vincular la gestión de gobierno con “hechos de corrupción” en procesos legales que carecían de toda verosimilitud, dejando mucho que desear en el seguimiento de los procedimientos ajustados a derecho y abusando de mecanismos excepcionales tales como las prisiones preventivas o las modalidades de

denuncia por parte de detenidos “arrepentidos”.²⁹

Estos procedimientos de guerra judicial tienen un doble objetivo: por un lado hostigar hasta el punto de privar de la libertad a los/as líderes nacionales-populares de América Latina y, por otro, garantizar el desprestigio social y político de los liderazgos nacional populares para garantizar el ascenso de propuestas políticas neoliberales en consonancia con las necesidades de la economía global y la política exterior norteamericana para América Latina.

En función de esos objetivos, la estrategia de la guerra jurídica no podía ser sólo judicial sino que, para ser efectiva, debía ser también mediática.

Noticias falsas y Posverdad: el dispositivo que completa la nueva Doctrina de la seguridad nacional.

En el año 1992, en plena guerra e invasión norteamericana del Golfo Pérsico, el literato Steve Tesich publicó un artículo en la revista “The Nation” de los Estados Unidos. En el contexto de la Guerra del Golfo, señaló: “lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un mundo donde reina la posverdad (post-truth)”.³⁰

El autor se refería, sin duda alguna, a la utilización de la mentira lisa y llana como mecanismo para apelar a las definiciones emocionales y rápidas de la opinión pública en el contexto de las “razones” que ameritaban la invasión norteamericana a Irak.

En el año 2004 Ralph Keyes publicó su libro “Post-truth” y, en el año 2005 el comediante Stephen Colbert popularizó el término “posverdad” como un modo de decir algo de modo que parezca verdad cuando no lo es.

La idea de una sociedad que vive en la posverdad puede llevar a la confusión si no aclaramos que, obvio, “la verdad” sigue existiendo, pero, con una modificación fundamental: no es lo más relevante.

Los hechos, en los medios masivos, han sido sustituidos por argumentos opinables, emocionales, irracionales y la metodología es la repetición al infinito de los mismos.

29 Camila Vollenweider y Silvina Romano. *Lawfare. La judicialización de la política en América Latina*. Celag. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf

30 Boczkowski, Pablo. Las noticias falsas y el futuro del periodismo. <http://revistaanfibia.com/ensayo/la-posverdad/>

Este fenómeno requiere además de otro componente: el/a sujeto o los/as sujetos/as receptores deben estar predispuestos o disponibles para que la posverdad haga efecto sobre sus subjetividades.

Éste es uno de los temas claves en la lógica de la pos-verdad: hay actores sociales que son proclives a creer lo que es señalado como una verdad absoluta sin necesidad de chequearlo en los hechos; es más, prescindiendo de los hechos.³¹

El complemento tecnológico de la posverdad son los distintos medios de comunicación social que se desarrollan con vertiginosa rapidez en este siglo XXI: TV, plataformas web, redes sociales, teléfonos personales multifunción, facebook, instagram, tweeter, wassap, mailings... hay toda una vinculación tecnológica multiplataformas en las que las noticias, las frases, las fotos circulan a una velocidad y a una escala nueva y absolutamente vertiginosa en tiempo real.

Mientras este fenómeno respondía a una modalidad que podríamos calificar como “amateur”; o sea de divulgación de noticias y afirmaciones falsas por parte de usuarios de las redes sociales sin vinculación entre sí, el fenómeno no pasaba de ser uno de los “efectos no deseados o colaterales” del nuevo universo de redes sociales.

Pero, cuando la posverdad develó sus posibilidades político-económicas, como mecanismo de orientación y búsqueda de respuesta emocional y rápida de la opinión pública frente a situaciones que requerían de aprobación social (una guerra por ejemplo) su escala se transformó completamente: las Agencias de Inteligencia en vinculación con los medios oligopólicos y las multiplataformas virtuales en manos de empresas privadas le dieron a la pos-verdad un modo de divulgación que le permite llegar a cada uno/a de los ciudadanos consumidores de redes virtuales y sociales.

¿Ejemplos?

Donald Trump compitió contra Hilary Clinton en el año 2017. El 70% de sus afirmaciones durante su campaña electoral fueron reportadas como “falsas” cuando se las compararon con los hechos; sin embargo fueron percibidas como verdades por buena parte de los votantes norteamericanos. Luego se comprobó su falsedad pero la elección ya había ocurrido.

31 Rafa Nuñez Rubio. *Los efectos de la posverdad en la democracia*. (Sept-dic. 2018). UNED, Revista de Derecho Político.

Según el diario Washington Post, esta modalidad de la posverdad continuó en sus primeros 200 días de gobierno: 1.318 afirmaciones en sus discursos como presidente fueron reputadas como falsas cuando se las cotejaba con la realidad. Entre ellas, afirmaciones sobre la peligrosidad inherente a la inmigración mexicana o que los EEUU eran el país del mundo donde se pagaban más impuestos. Ninguna de estas afirmaciones podían cotejarse con la realidad, pero fueron bien recibidas por el votante medio norteamericano.

En el año 2016, el presidente Santos de Colombia sometió la aprobación de un acuerdo de paz con las guerrillas de las Farc a la población colombiana. El acuerdo se proponía terminar con más de cincuenta años de guerra civil colombiana.

Durante el proceso de preparación del plebiscito, los medios masivos de comunicación de la derecha y la ultraderecha colombianas hicieron circular afirmaciones tales como que el acuerdo iba a transformar a Colombia en una “dictadura comunista” y que los ex guerrilleros iban a evadir los alcances de la justicia luego de firmado el acuerdo. Ambas posiciones eran falsas y no estaban contempladas en los acuerdos, sin embargo triunfó el NO.

En este nuevo modo de operar con “la verdad”, el público en general, ante la proliferación de información manipulada, repetida y afirmada por varios medios y personajes, termina por tener grandes dificultades para distinguir lo verdadero de lo falso. O, lo que es más grave, responde emocional y rápidamente a la información distribuida en el formato de la pos-verdad. Puede que luego la verdad llegue a conocerse, pero las definiciones político-económicas ya fueron tomadas.

Así, las noticias falsas (fake news) son un segmento relevante de la posverdad.

Posverdad y noticias falsas son absolutamente imposibles hoy sin la complicidad de las grandes empresas de comunicación privadas oligopólicas, dueñas de los medios que concentran una comunicación social en cada vez menos manos.

La Nueva Doctrina de la seguridad Nacional se consolida en América Latina.

Habiendo recorrido los tres conceptos de guerra jurídica (lawfare),

noticias falsas (fakes news) y posverdad podemos ensayar una explicación que fundamente por qué hablamos de nueva Doctrina de la Seguridad Nacional para América Latina.

Hay dos hechos que convergen en la historia reciente de América Latina, y que han generado profundos cambios en las relaciones entre los procesos sociopolíticos latinoamericanos y las respuestas de los Estados Unidos a los mismos.

El colapso final de la Unión Soviética (1992) se produce al momento en que se consolidan las democracias latinoamericanas, luego de las Dictaduras de la Seguridad Nacional.

Esta situación de “fin de ciclo” de las experiencias socialistas a escala mundial tendrá un impacto clave en las relaciones de las elites latinoamericanas con la política exterior norteamericana y con los procesos de democratización de carácter popular.

Ya no podrá apelarse al fantasma del “comunismo” como mecanismo de obturación de los procesos democrático-populares y, menos aún, a la intervención de las Fuerzas Armadas como mecanismo de represión disciplinadora en democracias que no discuten la raíz profunda del capitalismo y que no cuentan ya -en el imaginario de las elites- con apoyo “comunista” alguno en el exterior.

Sin embargo, en ese contexto de los años 90 aparecen nuevos procesos populares que se proponen resistir y modificar el despliegue de esa nueva modalidad del capitalismo transnacionalizado, el neoliberalismo.³²

Desde movimientos de resistencia popular -los piqueteros y movimientos sociales en la Argentina, el EZLN en México, los Sin Tierras en Brasil- hasta aquellos que alcanzaron un desarrollo político tal que accedieron al Estado, como el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el Frente Amplio en el Uruguay, el Partido Trabahlista en el Brasil, el Partido de la Revolución Bolivariana en Venezuela y otros de mayor trayectoria histórica como el peronismo kirchnerista en Argentina; en todos los casos, lo que se puso en discusión y crítica fueron precisamente las políticas neoliberales que se comenzaron a desplegar desde el llamado Consenso de Washington (1991): la estrategia de los Estados Unidos para

32 Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia. *El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina*. (Enero 2012). Revista SCielo. Polít. cult. no.37 México.

recomponer el hemisferio americano de la mano de un nueva modalidad -más agresiva y más profunda- del despliegue capitalista.

Parados en la primera década del siglo XXI, serán los movimientos y partidos populares quienes accedan a los gobiernos y presenten un modelo alternativo al neoliberalismo: ya los hemos mencionado al inicio de este artículo.

A este conjunto de gobiernos nacionales-populares y democráticos que se opusieron al despliegue neoliberal se les comenzó a asignar con tono despectivo una calificación única: “populismo”.

Y sobre este concepto se articularon varios motes asociados siempre en forma negativa: corrupción, robo de recursos públicos, desorden económico, desprecio por las instituciones de la república y, finalmente autoritarismo y dictadura.

En este punto, es en donde se articulan la guerra jurídica, pos-verdad y las falsas noticias: los medios masivos de comunicación social y las redes sociales de carácter virtual se transformaron en los espacios de divulgación y operación mediática en donde las noticias falsas y expresiones que no tenían correlato con la realidad se vuelven “virales”, aparecen en las tapas de cada día en los medios masivos y se replican en cientos de miles de tweets, mensajes de mail y dispositivos celulares.

Sobre esta divulgación de noticias falsas de las “corrupciones populistas” operan los jueces y fiscales de los sistemas judiciales desplegando un conjunto de medidas legales e ilegales de carácter persecutorio, con una seguidilla de causas -reales y ficticias- que ya han tenido sentencia “mediática” previa. A partir de allí se utilizan modalidades tales como prisiones preventivas o detenciones sin el debido proceso.

El desprestigio de los/as líderes de los partidos nacional populares se produce por una doble vía: los medios masivos y las redes sociales quedan confirmados por las sentencias y los juicios sumarios reñidos con la legalidad de los sistemas judiciales. En algunos casos ni siquiera es necesaria la sentencia: la persona atacada jurídica y mediáticamente queda inhabilitada políticamente por el impacto que tiene en la opinión pública la divulgación masiva de la mentira.

¿Por qué decimos que esta modalidad de guerra jurídica asociada a las noticias falsas y la pos-verdad se ha transformado en una Nueva Doctrina de la Seguridad Nacional? Porque desde los inicios del siglo XXI, los Estados Unidos han comenzado a financiar ya no una “escuela

de las Américas” para formar militares sino programas de capacitación jurídica destinados a jueces y miembros de los poderes judiciales de América Latina. Los Programas de capacitación jurídica se hacen en los EEUU o, a través de la USAID –programa norteamericano de ayuda (léase financiamiento) a organizaciones latinoamericanas en “territorio”. Así, ya son cientos los jueces y fiscales que se forman en la perspectiva de la Guerra Jurídica en la perspectiva del derecho norteamericano que es marcadamente diferente del de los países de tradición latina. De este modo toman atribuciones que antes no poseían, avaladas por los medios masivos de comunicación.

Los casos más emblemáticos de esta estrategia.

En el año 2008 gobernaba Honduras el presidente Zelaya. Él intentó una política interior moderadamente social y una alineación con las repúblicas de América del Sur vinculadas a la UNASUR; acercándose además a Nicaragua y Cuba. Esta política era resistida por la elite de derechas hondureñas y los EEUU. El presidente Zelaya propuso la idea de agregar una urna a las próximas elecciones presidenciales para consultar sobre la posibilidad de iniciar una reforma constitucional.

Los medios masivos hondureños trataron de “absurda” la solicitud democrática y repitieron permanentemente que el objetivo de Zelaya era reformar la constitución para “eternizarse en el poder”. El presidente dejó explicitado que no reelegiría, pero la campaña de medios ya había sido iniciada.

En el momento de definición, la Corte Suprema de Justicia Hondureña (de la rancia derecha) declaró ilegal la pretensión del presidente de instalar una cuarta urna para un plebiscito y, con esa declaración de ilegalidad fue detenido y exiliado a Costa Rica.

El golpe mediático-judicial había funcionado. Retomó el poder en 2009 luego de elecciones el partido de derecha hondureño.

En el año 2008 asumió Fernando Lugo como primer presidente no-colorado del Paraguay. Su gobierno inició una serie de reformas sociales y económicas que buscaron favorecer la situación de los más desposeídos del Paraguay. Desde el inicio mismo, el presidente fue hostigado profundamente por los medios masivos paraguayos, por supuestos actos de corrupción, y por motivos personales, exponiendo la vida privada del

presidente con ribetes de escándalo.

En junio de 2012 una finca de propiedad estatal, pero en manos de un terrateniente colorado llamada Caraguaty, fue ocupada por cientos de campesinos en situación de extrema pobreza. Luego de idas y vueltas -el gobierno de Lugo no pretendía reprimir la toma- las fuerzas policiales atacaron militarmente a los campesinos quienes respondieron defendiéndose de la agresión. Murieron 11 campesinos y seis policías.

La traducción de los medios masivos fue la de acusar a Lugo de “liviandad y displicencia” frente a la “ocupación ilegal campesina” y se instaló la idea de que el presidente estaba de acuerdo con la ocupación y expropiación de las tierras.

En medio de la campaña mediática y en tiempo récord, el Congreso se reunió el 21 de junio y destituyó al presidente el 22 de junio.

El golpe institucional se había producido en tiempo record. El partido colorado retomó el poder luego de las elecciones.

El 18 de enero del año 2015, el fiscal especial para la causa de la voladura de la AMIA -un atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina en el año 1994, que conmocionó al país y América Latina causando 85 muertos-, Alberto Nisman, apareció muerto en su departamento. El fiscal debía comparecer ante el Congreso de la Nación para ratificar o rectificar un informe muy crítico hacia el poder ejecutivo nacional en relación a lo que llamaba el encubrimiento de la causa AMIA al intentarse un Memorandum de Entendimiento con Irán.

Todas las pericias legales realizadas confirmaron que la causa de muerte había sido el suicidio: hasta la propia esposa del fiscal finalmente desistió de querellar asumiendo el suicidio como tal. Sin embargo, los medios masivos monopólicos opositores al gobierno de Cristina Fernández junto a fiscales y jueces opositores lograron sostener durante meses la idea de un asesinato político que involucraba al gobierno “populista” de Cristina Kirchner.

Hubo marchas masivas -donde participaron fiscales y jueces- reclamando se conociera “la verdad”. Al día de hoy no ha habido una sola pericia o comprobación legal que no señale -como ocurrió desde el principio- que la muerte del fiscal fue un suicidio. Pero, en las elecciones presidenciales de 2015, el “caso Nisman” influyó -y no poco-, en el triunfo del candidato opositor al gobierno popular.

En el caso de Dilma Rousseff -una luchadora encarcelada durante la dictadura, la primera mujer presidenta electa del Brasil y sucesora de Lula Da Silva por el Partido Trabalhista- la guerra judicial alcanzó un punto destacado de eficacia: se logró la remoción parlamentaria de la presidenta que había sido electa en votación directa por el pueblo brasileño.

En diciembre de 2015 se inició un proceso de destitución luego de meses de agresión mediática -en particular la Red O Globo- que acusaba a la presidenta de corrupción en el Lava Jato, luego en Petrobrás y finalmente en el incumplimiento de las normas presupuestarias. Solo quedó en pie la acusación por incumplimiento presupuestario -algo que estaba bajo la órbita de economía y no de la presidencia- pero bastó con eso para iniciar el proceso de destitución.

Los medios brasileños altamente monopolizados transmitieron día y noche la noticia de la “corrupción” presidencial. El proceso de destitución avanzó sin haber logrado probar ninguna irregularidad; sin embargo el Congreso destituyó a la presidenta y buena parte de la población no se movilizó, quizás con la duda sobre la veracidad de la “corrupción”. Rousseff fue reemplazada por el vicepresidente Temer -claramente orientado hacia la derecha- y al día de hoy la ex presidenta está legalmente libre de todo cargo judicial.

Pero, al probar que la guerra jurídica funcionaba, la derecha brasileña fue por más y apuntó al político que estaba en condiciones de ganar las elecciones de 2018: Ignacio Lula Da Silva.

El político más popular del país -luego de dos períodos de gobierno- se aprestaba a presentarse -y ganar, sin lugar a dudas- la elección presidencial. Pero el juez Moro -un ignoto juez que se “formó” en Estados Unidos en “lavado de dinero” inició una serie de procesos judiciales contra Lula Da Silva por casos de “corrupción” en su gobierno (que habían finalizado seis años antes).

La prensa hegemónica iniciaba la tarea mostrando día tras día cómo Lula Da Silva había adquirido propiedades. Ninguna de estas acusaciones lograron ser probadas; sin embargo, bajo una feroz campaña mediática, el juez Moro logró condenar a Lula da Silva por la supuesta compra de un departamento que nunca estuvo a nombre de Lula, que él nunca visitó y en el que nadie de su familia vivió.

El resultado fue perfecto: Lula no pudo presentarse a la elección nacional por estar detenido y fue electo el neofascista Jair Bolsonaro a

la presidencia.

La continuidad o el acceso al gobierno de movimientos, partidos o líderes nacional-populares hoy en América Latina no dependen del voto democrático sino del comportamiento articulado de los medios masivos de comunicación social oligopólicos y los sistemas judiciales cooptados por el establishment.³³

De este modo, los procesos democráticos consolidados desde el fin de las dictaduras de la Seguridad Nacional, se ven hoy amenazados seriamente por esta nueva modalidad de proscripción política o, en casos como Brasil, Honduras o Paraguay, nuevos modos de “golpes de estado” jurídico-mediáticos.

Cualquier líder o partido popular que haya batallado décadas en el campo eleccionario para llegar al gobierno, puede ver finalizado su gobierno o proscripta su carrera política por las operaciones mediático-judiciales construidas por un puñado de personas.

Nuestras democracias se han reducido y acotado. La voluntad popular está siendo burlada por el funcionamiento de una justicia sesgada, articulada y vinculada orgánicamente (a través de jueces, fiscales y periodistas) en conjunto con medios oligopólicos de carácter empresarial.

El riesgo para las democracias y los procesos populares en América Latina fue la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Hoy, llegando a la tercera década del siglo XXI, el riesgo está en una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional conducida por los medios masivos monopólicos de comunicación social y los poderes judiciales rechazados.

No basta con ganar elecciones.

El destino de nuestras democracias será incierto si no se comienzan a revisar y reformular los modos de funcionamiento de los poderes judiciales y las empresas oligopólicas de medios para reponer allí principios democráticos que reencaucen el equilibrio de poderes -típico de cualquier democracia republicana- con mecanismos de mayor democratización de la justicia y un mayor control social sobre la oligo-polización de los medios masivos .

33 Nasetto, Luciano. *Judicialización de la política y legitimidad democrática*. (2017). En : García Delgado, Daniel Documento de trabajo N° 5 : el neoliberalismo tardío : teoría y praxis / Daniel García Delgado ; Agustina Gradín ; compilado por Daniel García Delgado ; Agustina Gradín . - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Flacso Argentina.

Algunas conclusiones

La democracia en América Latina está en riesgo.

La expresión que asimila cualquier medida de las instituciones republicanas con la idea de democracia es, por lo menos, un error conceptual grave y por lo más, una estrategia de las derechas para volver legal y legítimas medidas que vulneran los principios más elementales del juego democrático.

No alcanza con votar cada dos o cuatro años, no es suficiente con que funcionen más o menos bien los parlamentos y el poder judicial. Una verdadera democracia no existe sólo en las formas sino en los hechos.

La pauperización, la explotación laboral y la exclusión social, la represión sistemática y la liberación de genocidas con artilugios legales son, en todos los casos, señales profundas de retroceso democrático y la única forma de modificar esa situación es profundizar los grados de participación popular y no resignar ninguno de los derechos que el pueblo posee como soberano absoluto en un orden democrático.

El campo de disputa está abierto: las derechas han logrado reconfigurarse y, por diversas vías han accedido al poder sin mediar la intervención militar.

Así, la construcción política puede ser democrática y mejorar las condiciones de vida de las mayorías, garantizar mayores derechos civiles y sociales y generar procesos de inclusión económica y cultural, u orientarse -aún en el juego de las instituciones de la república democrática, voto universal incluido,- hacia marcos societales de mayor inequidad, destrucción de la integración social, empobrecimiento popular y enriquecimiento elitista. Y ambas cosas a través del voto.

En este sentido -el de la construcción política democrática- es donde todos estos factores se conjugan para generar las democracias devaluadas que se van consolidando en Latinoamérica: un sujeto popular sometido al mismo tiempo a la incertidumbre económica permanente -cuando no a la falta absoluta de horizonte de destino-, al rol omnipresente de los grandes medios de comunicación monopólicos que refuerzan todas las perspectivas del modo civilizatorio neoliberal: meritocracia, individualismo, “triunfo o fracaso” individual, rol negativo del Estado

y las políticas públicas, defenestración de la política como actividad colectiva; ciudadano “informado” hasta el hartazgo de las causas de corrupción en gobiernos populares, y trabajando permanentemente sobre el refuerzo de que toda política pública sostenida por el Estado para compensar las inequidades sociales es injusta para con quienes “siempre lograron todo con su esfuerzo y su trabajo”.

La diferencia entre uno y otro proyecto -un proyecto democrático popular igualitario o uno sostenido en las instituciones republicanas, que con el voto popular apoya a las elites capitalistas- no radica en la corrección o no de la elección racional popular a través del voto sino en la generación de una propuesta política que sea una construcción democrática con vocación de poder integral y permanente: que proponga la intervención política popular en todos los niveles en donde hoy se ha establecido el programa económico, social y cultural elitista.

En este sentido, la cuestión política que podría plantearse para enfrentar el “alcance popular” de los líderes o partidos neoliberales, no radica tanto en descubrir por qué y cómo votan “mal” sino en cómo reconstituir un frente nacional, popular y democrático que integre a los sectores populares desde su situación actual y de cara a futuro.

No hay un deber ser preconstruido que ha sido “desvirtuado” por el entramado neoliberal. Hay un modo de ser popular que tenía un modo de ser de matriz nacional-popular y que ha ido mutando hacia modos neoliberales de comprender lo social.

La perspectiva es ardua, pero será imprescindible si esta ola neoderechista logra ser revertida: no alcanza con un Estado activo en los procesos de redistribución del ingreso y generación de políticas de inclusión y de consumo.

Es necesario revolucionar los sistemas educativos en todos los niveles: dejar de lado definitivamente los contenidos eurocéntricos, neoliberales, neoconservadores.

A la vez es necesario recuperar y profundizar la capacidad de intervención estatal en la educación a todos los niveles y dejar de lado el aislamiento de las instituciones educativas “privadas”, reemplazando la comodidad (o connivencia) de un Estado que sólo interviene en la educación pública para someter a control democrático a la educación privada como parte esencial de la sociedad nacional.

Promover y desarrollar políticas culturales desplegadas en el territorio,

en el entramado mismo de los barrios; promover el encuentro de los/as destinatarios de políticas públicas en el territorio, profundizar los espacios de toma de decisiones barriales. Ampliar y/o crear todo aquello que recupere el lazo social y señale la conveniencia de actuar colectiva y no escindidamente.

Resulta también imprescindible democratizar los sistemas judiciales, volverlos más transparentes y ampliar la participación popular en la elección de magistrados/as. Ni qué hablar respecto a los medios oligopólicos de comunicación: en el estado actual de su desarrollo y despliegue monopólico, los medios masivos son casi incompatibles con una verdadera democracia.

Democratizar la palabra implica reformular uno de los principios y prácticas más consolidados en la actualidad: la posibilidad de reflexionar sobre el significado verdadero de la libertad de expresión y la generación de marcos legales que limiten y obstruyan la consolidación de sistemas de comunicación monopólicos y excluyentes.

Bolsonaro, Macri, Piñera, Cartes no son extranjeros que impusiera el capital para mejor gobernar nuestros países: son presidentes votados en elecciones libres y no sólo por los sectores del privilegio económico-social. Estos presidentes de una neoderecha son los beneficiarios políticos (y luego económicos) de este enorme proceso de traslación desde un sujeto popular democrático inclusivo hacia un sujeto heterogeneizado y fragmentado .

Solidaridad, inclusión, igualdad, comunidad, política han sido reemplazadas por consignas directas, simples y sentidas: seguridad, cambio, esfuerzo, alegría, honestidad.

Construir un “nosotros” de carácter nacional y popular es el desafío para las sociedades latinoamericanas hoy.

Bibliografía

- Aleman, J. (2016), Horizontes neoliberales en la subjetividad, Buenos Aires, Grama.
- Allami, C. y A. Cibils (2017), "Financiarización en la economía latinoamericana. Deuda, commodities y acumulación de reservas", Revista Estado y Políticas Públicas, N° 8, Buenos Aires.
- Argumedo, A. (2004), Los silencios y las voces en América Latina, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento nacional.
- Aroskind, Ricardo. (2007)Preguntas sobre el desarrollo a comienzos del S. XXI, en, Karina Basualdo y Victoria Forcinito, Transformaciones recientes en la economía Argentina. Tendencias y perspectivas. Prometeo,
- Becerra, M. (2015), De la concentración a la convergencia. Política de Medios en Argentina y América Latina, Buenos Aires, Paidós.
- Becerra, M. y G. Mastrini (2017), La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Nuevos medios y tecnologías, nuevos actores, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes / Observacom.
- Boron, Atilio (2000) Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. F.C.E. México.
- Cavarozzi, M. (1991), Más allá a las transiciones democráticas en América Latina, Revista de Estudios Políticos. Nueva Época, N° 74, Buenos Aires.
- Ciappina, C. (2014), Estados nacionales: recuperación económica con inclusión social. La reconstrucción de la gestión estatal en América Latina y su proyección a futuro. Ponencia para el Congreso de Economía Política Internacional, Universidad Nacional de Moreno.
- Chavez Daniel, Hernán Ouviña, Mabel Thwaites Rey (eds.). Venezuela lecturas urgentes desde el sur . <https://www.tni.org/files/publication-downloads/venezuela-sur.pdf>
- Delano, M. y H. Traslaviña (1989), La herencia de los Chicago Boys, Santiago de Chile, Ediciones del Ornitorrinco.
- Foucault, M. (2007), Nacimiento de la biopolítica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Fukuyama, F. (1992), El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Planeta.

- Galvis Ortiz, C.A. y L.H. Botero Montoya (2009), Oligopolios de la comunicación: ¿amenaza global de la democracia?" Reflexión Política, vol. 11. Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11011851011>>.
- García Linera, Á. (2009), La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Bogotá, Siglo del Hombre Editores / CLACSO.
- García Linera, Á., R. Prada, L. Tapia y Ó. Vega Camacho (2010), El Estado. Campo de lucha, Bolivia, CLACSO.
- Gentili, Pablo (editor). (2016) Golpe en Brasil, genealogía de una farsa. 1a ed . Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO; Buenos Aires : Fundación Octubre; Buenos Aires : UMET, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
- Grabendorff, W. (1997), Algunas transiciones a la democracia en América Latina: elementos comparativos y tímidas lecciones, Quito, Universidad Simón Bolívar.
- Gramsci, A. (1980), Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Klein, N. (2016), La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Buenos Aires, Paidós.
- Lander, E. (2000), La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO.
- Leiras, Santiago.(2016) Brasil 2016: entre la legalidad y la (i) legitimidad. <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/11/20.-dossier-LEIRAS.pdf>
- López Maya, Pilar Calveiro Y Nicolás Iñigo Carrera (comp.); (2008) Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina. Clacso libros, Bs.As.
- López Segrera.(2016.) América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha / -1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
- Martínez Rangel, R. y E. Soto Reyes Garmendia (2012), El Consenso de Washington, la instalación de las políticas neoliberales en América Latina, Política y Cultura, Nº 37, Universidad de Xochimilco.
- Mastrini, G. y M. Becerra (2001), 50 años de concentración de medios en América Latina: del patriarcado artesanal a la valorización en escala en Quirós, F. y F. Sierra (dirs.), Crítica de la economía política de la comunicación y la cultura. Comunicación, globalización y democracia, Sevilla, Comunicación Social ediciones y publicaciones.

- McLuhan, M. y B.R. Powers (1995), La aldea global, Barcelona, Gedisa.
- Merlín, N. (2017), Colonización de la subjetividad. Los medios masivos en la época del biomercado, Buenos Aires, Cúspide.
- O'Donnell, G. (1978), Apuntes para una teoría del Estado, Buenos Aires, CEDES.
- Oszlak, O. (1997), La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional, Buenos Aires, Planeta.
- Rouquié, A. (1984), El Estado militar en América Latina, México, Siglo XXI.
- Saintout, F. (1998), Los estudios de recepción en América Latina, La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicación, Universidad Nacional de La Plata.
- (2012), Democracia y comunicación. Los medios y la disputa por la construcción de sentido, La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicación, Universidad Nacional de La Plata.
- Viguera, A. (1993), Populismo y neopopulismo en América Latina, Revista Mexicana de Sociología, vol. 55, N° 3.
- Vommaro Gabriel, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti. (2015) Mundo PRO Ed. Planeta. Bs. As.
- Wolin, S. (2008), Democracia S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido, Madrid, Katz.